

EL DERECHO AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 2-44)

—

EL DRET AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 45-89)

LUCÍA CASADO CASADO

Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

Sumario. 1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña. 1.1. La modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. 1.2. Algunas normas no ambientales con rango de ley de interés desde el punto de vista ambiental. A. La adopción de medidas en materia de eficiencia energética: el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. B. La Ley 9/2014, de 9 de mayo, de telecomunicaciones. 1.3. Novedades en ámbitos sectoriales diversos. A. Patrimonio natural y biodiversidad. B. Protección del medio marino. C. Aguas. D. Protección de la atmósfera. E. Energías renovables. F. Una nueva regulación para el Consejo Nacional del Clima. 1.4. Otras normas de interés. 2. Derecho y políticas ambientales autonómicas. 2.1. La nueva regulación del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible. 2.2. La regulación de la homologación de métodos de captura en vivo de especies cinegéticas depredadoras y de especies exóticas invasoras depredadoras. 2.3. El Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística. 2.4. Otras normas de interés. 2.5. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. A. El nuevo modelo de saneamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana de Barcelona. B. La aprobación del Plan General de Política Forestal 2014-2024. C. La aprobación del Plan de Actuación para la mejora de la calidad del aire en las zonas de protección especial del ambiente atmosférico.

1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña

Durante el período objeto de análisis (del 1 de abril de 2014 al 30 de septiembre de 2014) ha proseguido, a nivel estatal, la oleada de reformas legislativas en materia ambiental. A la aprobación de la reforma de la Ley de Costas y de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y de la nueva Ley de Evaluación Ambiental, ha seguido ahora la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y está en un estado de tramitación muy avanzado el Proyecto de Ley de Parques Nacionales (aprobado en septiembre por el Congreso y pendiente de su aprobación por el Senado). Sin duda, la Ley 11/2014 es la norma más destacable en este período en materia de protección del medio ambiente, aunque se han aprobado otras normas con rango de ley con incidencia en la materia. Entre ellas, destacamos la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones; el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; y la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

Como viene siendo habitual, también se han aprobado en estos meses varias normas reglamentarias en ámbitos sectoriales diversos (patrimonio natural y biodiversidad, protección del medio marino, aguas, protección de la atmósfera, energías renovables...), aunque quizá lo más destacable sea la aprobación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que establece un nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración

y residuos. Asimismo, en el ámbito organizativo se ha aprobado una nueva regulación para el Consejo Nacional del Clima.

En el plano internacional, merecen especial mención la adhesión de España a la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, hecho en Nueva York el 21 de mayo de 1997¹; y la ratificación por parte de España del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010².

También se ha puesto de manifiesto en este período la conflictividad competencial entre Estado y comunidades autónomas. Buena prueba de ello son los recursos de inconstitucionalidad promovidos por las Cortes de Aragón³ y por el Gobierno de Cataluña⁴ contra la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; los recursos de inconstitucionalidad promovidos contra la Ley de La Rioja 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la técnica de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional (recurso sobre el que ya ha recaído sentencia del Tribunal Constitucional, la Sentencia 134/2014, de 22 de julio) y contra la Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, del Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura

¹ Instrumento de adhesión a la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, hecho en Nueva York el 21 de mayo de 1997. BOE, núm. 161, de 3 de julio de 2014.

² Instrumento de Ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010. BOE, núm. 202, de 20 de agosto de 2014.

³ Mediante Providencia de 8 de abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1399-2014, promovido por las Cortes de Aragón contra la disposición adicional decimoquinta, disposición transitoria segunda, disposición derogatoria única, apartado tercero, y disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE, núm. 91, de 15 de abril de 2014).

⁴ Mediante Providencia de 8 de abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1410-2014, promovido por el Gobierno de Cataluña contra los artículos 12.2, 3 y 4; 17; 18; 19.1; 21.2; 23; 24.4 y 5; 25.4; 27.1, 2, 3 y 4; 28.4, 5 y 6; 29; 30.2; 33; 34.1, 2 y 4; 35.1; 39; 40.3 y 4; 43.1, 2, 3 y 4; 44.4, 5 y 7; 45; 46.2 y 3; 47.2.a) y 6; 49; 50.1; la disposición final octava.1, por cuanto invoca el artículo 149.1.23.^a CE como habilitación competencial de los artículos anteriormente citados y de los apartados 1 al 7 del anexo VI; y la expresión “y supletoria” de la disposición final undécima *in fine* de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE, núm. 91, de 15 de abril de 2014).

hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional⁵; los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Parlamento de Cataluña⁶, por el Gobierno de Cataluña⁷ y por el Consejo de Gobierno de Andalucía⁸ contra la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado; el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas⁹; los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Consejo de Gobierno de Andalucía¹⁰ y por la Junta de Extremadura¹¹ contra el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12

⁵ Mediante Providencia de 9 de septiembre de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4983-2014, promovido por el presidente del Gobierno contra la Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, del Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Asimismo, acuerda la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso —28 de julio de 2014— para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el *Boletín Oficial del Estado* para los terceros (BOE, núm. 223, de 13 de septiembre de 2014).

⁶ Mediante Providencia de 8 de abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1397-2014, promovido por el Parlamento de Cataluña contra los artículos 14.2 y, por conexión, 23.2; 16; 17; 18 y, por conexión, 5 y disposición final segunda; 19; 20; 26.5; 27 en relación con la disposición final primera, apartado tres; apartado uno y, por conexión, dos de la disposición final tercera y disposición final cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (BOE, núm. 91, de 15 de abril de 2014).

⁷ Mediante Providencia de 8 de abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1411-2014, promovido por el Gobierno de Cataluña contra los artículos 5, 6, 14.2, 16 a 20, 23, 26.5, 27, disposición adicional décima y disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (BOE, núm. 91, de 15 de abril de 2014).

⁸ Mediante Providencia de 8 de abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1454-2014, promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra los artículos 6; 14.2; 17, último inciso del párrafo primero y letras a) a d); 18.2, letras b) a f); 19; 20; 21.2 y 3; 23.2; 26; 27; disposición adicional décima y disposiciones finales primera, segunda y cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (BOE, núm. 91, de 15 de abril de 2014).

⁹ Por providencia de 6 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1976-2014, promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, contra los artículos 9.1; 10.1, 2, 3 y 4; 12; 13.2 y 3; 15.1 y 3; 16; disposición transitoria segunda y disposición final duodécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, en cuanto modifican los artículos 2; 6.3 y 5; 8.3.a) y c); 9.2, 3, 8 y 9; 10.1.b); 12.3; 14.1, 2 y 3; 15.4; 16.1.b) y c); 17.3, 4 y 6 y 39.1 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (BOE, núm. 116, de 13 de mayo de 2014).

¹⁰ Por providencia de 27 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2391-2014, promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra las disposiciones transitoria tercera y final segunda del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (BOE, núm. 132, de 31 de mayo de 2014).

¹¹ Por providencia de 27 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2408-2014, promovido por la Junta de Extremadura contra el artículo 1, apartados 2 y 3; disposición adicional primera; disposición transitoria tercera; disposiciones finales segunda y octava y disposición derogatoria única del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por

de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico; los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Parlamento de Cataluña¹² y por el Gobierno de Cataluña¹³ contra la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico¹⁴; y el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios socialista; IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda plural; y Unión, Progreso y Democracia contra el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia¹⁵. Asimismo, se han planteado ante el Tribunal Constitucional algunas cuestiones de inconstitucionalidad¹⁶; y, en el ámbito de la

el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (BOE, núm. 132, de 31 de mayo de 2014).

¹² Por Providencia de 6 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1820-2014, promovido por el Parlamento de Cataluña contra los artículos 9, 40, 43.5, 46, 51, 52.4 y disposición final segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE, núm. 116, de 13 de mayo de 2014).

¹³ Por Providencia de 6 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1908-2014, promovido por el Gobierno de Cataluña contra los artículos 3.13.a), 9, 15, 33.5, 38.8, 40, 43.5, 46, 51, 52 y disposición final segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE, núm. 116, de 13 de mayo de 2014).

¹⁴ Vid. el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 7/2014, de 27 de febrero, sobre la Ley 24/2013, de 26 de septiembre (DOGC de 3 de abril).

¹⁵ Por Providencia de 23 de septiembre de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 5099-2014, promovido por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios socialista; IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda plural; y Unión, Progreso y Democracia contra el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE, núm. 235, de 27 de septiembre de 2014).

¹⁶ Destacamos la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1549-2014 planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la ejecución definitiva núm. 116-2012/procedimiento ordinario 858-2006, en relación con la Ley 5/2010, de 28 de mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 27 de junio, de declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia), por posible vulneración de los artículos 9.3 y 24.1 en relación con el artículo 117.3 de la CE, admitida a trámite por el Tribunal Constitucional mediante Providencia de 6 de mayo de 2014 (BOE, núm. 116, de 13 de mayo de 2014); la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1591-2014 planteada por la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el procedimiento ordinario núm. 276-2010, en relación con los artículos 22.1.a) y 2 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y 23.1.a) y 2 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por posible vulneración del artículo 33.3 de la CE, admitida a trámite por el Tribunal Constitucional mediante Providencia de 6 de mayo de 2014 (BOE, núm. 116, de 13 de mayo de 2014); y la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4538-2013 planteada por la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de casación núm. 5971/2010, en relación con los artículos 2, 6 y 8 de la Ley 7/1997, de 29 de mayo, de la Asamblea de Extremadura, de Medidas Fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente, en la redacción dada a estos por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre, de Reforma de Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por posible vulneración de los artículos 133.2, 156.1 y 157.3 de la Constitución, admitida a trámite mediante Providencia de 6 de mayo de 2014 (BOE, núm. 116, de 13 de mayo de 2014).

energía eléctrica, un conflicto positivo de competencias por parte del Gobierno de Cataluña¹⁷.

En cuanto a los proyectos de ley en trámite, prosigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de Parques Nacionales¹⁸; y han iniciado su tramitación el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado¹⁹, y el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha abordado en julio de 2014 con representantes de las comunidades autónomas la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, debatiendo un borrador de esta modificación legislativa durante la celebración, en Madrid, de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

En cuanto a las normas reglamentarias en trámite, continúa su tramitación el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Costas, que fue presentado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al Consejo Asesor de Medio Ambiente y también abierto a consulta pública el pasado mes de marzo y sobre el cual ya ha emitido su dictamen el Consejo de Estado. También se encuentra en tramitación el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y se ha presentado el borrador de Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecerá la fecha a partir de la cual será exigible la

¹⁷ Por providencia de 27 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el conflicto positivo de competencia núm. 2304-2014, promovido por el Gobierno de Cataluña contra los artículos 8.4; 21; 22; 25, apartados 3, 4 y 5 (párrafos primero y segundo) y 7; 26.3; 31; 32 y disposición final primera del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica (BOE, núm. 132, de 31 de mayo de 2014). Vid. el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 12/2014, de 20 de marzo, sobre el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre (DOGC de 17 de abril de 2014).

¹⁸ *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, Congreso de los Diputados, X Legislatura, Serie A, núm. 78-1, de 31 de enero de 2014.

¹⁹ *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, Congreso de los Diputados, X Legislatura, Serie A, núm. 92-1, de 25 de abril de 2014.

constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. En materia de residuos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado al Consejo Asesor de Medio Ambiente, para la emisión de su informe, el proyecto de Real Decreto para regular el traslado de residuos y la modificación del Real Decreto sobre restricciones de utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos. En el ámbito de la protección del medio marino, este mismo ministerio ha sometido a consulta pública la propuesta de programas de seguimiento de las estrategias marinas, que pretenden englobar todas aquellas actuaciones encaminadas a la toma de datos sobre el estado ambiental del medio marino para las cinco demarcaciones marinas españolas (Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho y Alborán, Levantino-Balear y Canaria). En el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, también se han debatido varias propuestas de modificación del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

En el ámbito de la planificación, también debe destacarse que el Gobierno, aunque con un enorme retraso, ya ha finalizado la planificación hidrológica de competencia del Estado, que debería haber estado concluida a finales de 2009, con la aprobación de los planes hidrológicos de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo y de las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar (reales decretos 270/2014, de 11 de abril; 594/2014, de 11 de julio; y 595/2014, de 11 de julio). Paralelamente a la conclusión del primer ciclo de planificación hidrológica, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, también ha iniciado el segundo ciclo de planificación, que concluirá en 2015. Por otro lado, ha aprobado el Plan de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2014, cuyas medidas implican a varios ministerios (Presidencia; Asuntos Exteriores y de Cooperación; Justicia; Defensa; Interior; Fomento; Industria, Energía y Turismo; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Economía y Competitividad). Asimismo, en el ámbito de la protección del patrimonio natural y la biodiversidad, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad para integrar los objetivos de conservación en la política de turismo e impulsar la puesta en valor de la red Natura 2000, a la que España aporta un 27% de su territorio; y, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, se ha aprobado la Estrategia Española para Impulsar la Conservación de la Diversidad Vegetal Silvestre,

que deriva del compromiso de España con la Estrategia Mundial de Conservación de Especies Vegetales, como parte del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.

Por último, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado los avances del Programa de Caminos Naturales desarrollado por este ministerio desde el año 1993, cuya finalidad es la creación y consolidación de una red de itinerarios naturales (la Red de Caminos Naturales), de longitud y tipología variable, gracias a la recuperación de infraestructuras existentes, en desuso o no. En la actualidad se han construido un total de 109 caminos, con una longitud de más de 8.700 kilómetros, y se han realizado y enlazado ya una parte importante de los de largo recorrido. A través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, este ministerio también ha publicado en su página web el “Avance de la Evaluación de la Calidad del Aire en España 2013”, dando cumplimiento a la normativa europea (la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, así como la Directiva 2004/107/CE) y al Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Durante 2014 continúa en aplicación el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, “Plan AIRE”, aprobado por el Ministerio en 2013, que incluye un conjunto de medidas, horizontales y sectoriales (entre otras, en materia de tráfico, industria, construcción, puertos y aeropuertos, agricultura y ganadería), encaminadas a mejorar la calidad del aire desde un ámbito nacional. Asimismo, en el transcurso de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad también se ha revisado el Marco de Acción Prioritaria para la red Natura 2000 en España para el período de financiación 2014-2020, un trabajo conjunto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas que recoge las prioridades de conservación y las acciones necesarias en la red Natura 2000, con una mejor definición de los objetivos, las necesidades, las prioridades de esta gestión y las posibilidades de financiación, para su próxima remisión a la Comisión Europea.

1.1. La modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental

El pasado 4 de julio de 2014 se publicó en el BOE la Ley 11/2014, de 3 de julio, de modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad

Medioambiental²⁰. Esta modificación se realiza con el objetivo de “reforzar los aspectos preventivos de la misma, simplificar y mejorar ciertos aspectos de su aplicación”. Mediante ella se incorpora al ordenamiento jurídico español el artículo 38 de la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE.

Esta ley ha introducido diversas modificaciones en la Ley de Responsabilidad Medioambiental. En primer lugar, modifica su artículo 2.1.b) y amplía la definición de los daños a las aguas, que pasan a incorporar los daños “en el estado ecológico de las aguas marinas, tal y como se define en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección de Medio Marino, en la medida en que diversos aspectos del estado ecológico del medio marino no estén ya cubiertos por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas”. Esta precisión se incluye con el fin de incorporar la modificación de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, establecida en el artículo 38 de la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013. Esta directiva tiene por objeto establecer los requisitos mínimos destinados a prevenir accidentes graves en las operaciones relacionadas con el petróleo y gas mar adentro y a limitar las consecuencias de tales accidentes y, para ello, modifica la Directiva 2004/35/CE, con el fin de asegurar que la responsabilidad del operador se aplique a las aguas marinas.

En segundo lugar, introduce algunas modificaciones en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental a las obras públicas de interés general de la Administración general del Estado. Por una parte, se incluye un nuevo apartado en el artículo 3, relativo al ámbito de aplicación de la Ley, con el fin de precisar su ámbito de aplicación en el caso de obras públicas de interés general que sean competencia de la Administración general del Estado. En este caso, la Ley se aplicará a los daños causados a las especies y a los hábitats protegidos, a las aguas, al suelo y a la ribera del mar y de

²⁰ Con arreglo a su disposición final tercera, esta ley “tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, salvo los apartados cinco al diez que constituyen legislación básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª de la Constitución Española, y el apartado 3 que tiene carácter de legislación dictada al amparo de las reglas 18.ª, 23.ª y 24.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española. El plazo establecido en el artículo 45.3 no tendrá carácter básico”.

las rías, y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia; y únicamente a los daños causados a las especies y los hábitats naturales protegidos si han sido causados por actividades profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III y a cualquier amenaza inminente de tales daños debida a alguna de esas actividades, siempre que haya habido culpa o negligencia por parte del operador. Se prevé que la normativa autonómica en la materia podrá determinar la aplicación de este precepto a las obras públicas de especial relevancia e interés equivalentes a las de interés general del Estado cuya titularidad y competencia corresponda a las comunidades autónomas.

Por otra, se suprime la disposición adicional décima de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que exceptuaba su aplicación en las obras públicas de interés general cuando se hubiera seguido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se hubiera cumplido con las prescripciones establecidas en la declaración de impacto ambiental. Este supuesto no estaba contemplado en la lista de excepciones de la Directiva 2004/35/CE y, dada su posible incompatibilidad con esta directiva, se opta por suprimirlo²¹. Asimismo, para que esta supresión no produzca el efecto no deseado de control por las comunidades autónomas de las obras públicas estatales cuya evaluación de impacto ambiental ya está atribuida a la Administración estatal²², se añade un nuevo apartado en el artículo 7 que establece la competencia de la Administración general del Estado para exigir la adopción de las medidas de prevención, evitación y reparación que procedan cuando se trate de obras públicas de interés general de su competencia. Si el daño o la amenaza de que el daño se produzca afectan a recursos naturales cuya tutela recaiga en las comunidades autónomas, será preceptivo recabar el informe del órgano autonómico competente.

En tercer lugar, con el fin de reforzar los aspectos preventivos, se prevé que las autoridades competentes adoptarán medidas para impulsar, entre los operadores de cualquier actividad susceptible de ocasionar daños medioambientales, la realización

²¹ En el propio preámbulo se afirma que se suprime esta disposición adicional “con el objeto de mejorar la transposición de la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales”.

²² LOZANO CUTANDA, B. y POVEDA GÓMEZ, P., “Ley 11/2014, de 3 de julio, de modificación de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental: análisis de sus novedades”, *Análisis Gómez Acebo & Pombo*, julio de 2014, p. 2.

voluntaria de análisis de riesgos medioambientales con la finalidad de lograr una adecuada gestión del riesgo medioambiental de la actividad (nuevo art. 17 bis).

En cuarto lugar, se simplifican ciertos aspectos de la aplicación del régimen de responsabilidad medioambiental, tanto para los operadores económicos como para las administraciones públicas, con el fin de dar cumplimiento a las medidas previstas en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que, en materia de responsabilidad medioambiental, alude a la simplificación y reducción de cargas administrativas. En aras de dicha simplificación, se modifican algunos aspectos relativos a las garantías financieras. A continuación, se destacan las principales novedades:

- Se precisa que la obligación de disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que pretendan desarrollar se aplica únicamente a los operadores de las actividades incluidas en el anexo III, sin perjuicio de las exenciones previstas en el artículo 28, siendo para el resto de operadores de carácter voluntario. Se pretende, con ello, fomentar la utilización de los análisis de riesgo medioambiental como herramienta de gestión del riesgo medioambiental (art. 24.1).
- Se traslada de la autoridad competente al propio operador la determinación de la cantidad mínima que deberá quedar garantizada, según la intensidad y extensión del daño que la actividad del operador pueda causar, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente. Los operadores deberán comunicar a la autoridad competente la constitución de la garantía financiera a la que vengán obligados. La fijación de la cuantía de esta garantía partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad, o de las tablas de baremos, que se realizarán de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca por el Gobierno. La autoridad competente establecerá los correspondientes sistemas de control que le permitan comprobar el cumplimiento de estas obligaciones (art. 24.2 y 3). De esta forma, según el preámbulo, “se agiliza el procedimiento para la determinación de la garantía financiera, siendo el operador obligado a constituir una garantía financiera, quien determina su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos

medioambientales de su actividad, y quien comunica a la autoridad competente la constitución de la garantía”.

- Se amplían los sujetos garantizados por la garantía financiera, de forma que pueden figurar, asimismo, como sujetos garantizados adicionales los subcontratistas, los profesionales que colaboren con dicho operador en la realización de la actividad autorizada y la persona o entidad titular de las instalaciones en las que se realice la actividad” (art. 27).
- Se determinan los criterios que servirán de base para fijar, por vía reglamentaria, las actividades exentas de constituir garantía financiera obligatoria. Concretamente, en su nueva redacción, el apartado d) del artículo 28 establece que tal exención deberá atender “a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad”. Con esta previsión se “introduce un elemento de control de la habilitación otorgada al Gobierno”²³.
- Se modifica el artículo 30 de la Ley para homogeneizar el contenido mínimo de las pólizas de seguros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá promulgar disposiciones por las que se regulen el contenido mínimo y las limitaciones que serán admisibles, tales como sublímites, exclusiones o franquicias a cargo del titular de la actividad, de forma que se conjuguen adecuadamente el interés de las administraciones públicas en que los titulares de las actividades sometidas a la obligación cuenten con suficiente cobertura para todos los aspectos posibles de su responsabilidad medioambiental con la oferta de garantías disponible en cada momento en los mercados financieros.
- Se modifica el artículo 31.1 de la Ley, referido a la vigencia de la garantía financiera obligatoria, para precisar que esta debe estar vigente durante todo el período de actividad, desde la fecha en que su constitución sea obligatoria y hasta su cese efectivo.

En quinto lugar, se modifica el artículo 33, sobre el Fondo de Compensación de Daños Medioambientales del Consorcio de Compensación de Seguros, para adaptar su regulación a la situación actual de la normativa nacional bajo la que está constituido, ya que actualmente opera un sistema de liquidación de entidades aseguradoras en situación

²³ LOZANO CUTANDA, B. y POVEDA GÓMEZ, P., “Ley 11/2014...”, *op. cit.*, p. 2.

de insolvencia, gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros, que, de facto, supone un mecanismo de garantía para los asegurados de todos los ramos del seguro y que también operaría en relación con la cobertura de responsabilidad medioambiental. Por ello, se suprime la adscripción de este fondo a los supuestos de insolvencia de las entidades aseguradoras de la póliza de garantía obligatoria y se mantiene para prolongar la cobertura del seguro para los daños ocurridos durante la vigencia de la póliza pero con manifestación diferida.

Finalmente, se modifican algunos aspectos del capítulo VI sobre normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, con el objetivo de mejorar su tramitación. En esta línea, se modifica el artículo 41 para precisar los trámites de iniciación en el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental. Asimismo, se modifica el plazo establecido en el artículo 45.3 para resolver los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, que pasa a ser de seis meses, ampliables a tres meses más en casos científica y técnicamente complejos. Transcurrido este plazo, a efectos exclusivamente de garantizar el derecho de los interesados a la tutela administrativa y judicial, se entenderá caducado el procedimiento iniciado de oficio, sin perjuicio de la obligación inexcusable de la autoridad competente de resolver. Sin embargo, la Ley ha suprimido la referencia a la desestimación por silencio del procedimiento iniciado a instancia de parte, por lo que, en aplicación del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberá entenderse estimatorio²⁴.

Por otro lado, la Ley 11/2014, objeto de análisis, también modifica la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (se incorpora un nuevo párrafo al apartado 1 de la disposición derogatoria única²⁵), y la Ley 10/2001, de

²⁴ Así lo advierten LOZANO CUTANDA, B. y POVEDA GÓMEZ, P., “Ley 11/2014...”, *op. cit.*, p. 3, que señalan que el silencio en estos casos deberá entenderse estimatorio “al menos de la concurrencia de un supuesto de responsabilidad, pues difícilmente pueden ‘estimarse’ por silencio medidas de prevención o de reparación medioambiental”.

²⁵ La redacción del nuevo apartado que se incorpora es la siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, la regulación contenida en los artículos 4, 11, 15 y 20 sobre emplazamientos y distancias que en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas se establece, no será de aplicación a las instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de depuración de aguas residuales, instalaciones desalobradoras y desalinizadoras, siempre que tal cuestión hubiera sido objeto de análisis y corrección, en su caso, mediante las medidas procedentes con arreglo a las mejores técnicas disponibles o que se ajusten a lo que al respecto determine la evaluación ambiental o, en su caso, la autorización ambiental integrada correspondiente o título administrativo equivalente”.

5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (se amplía su anexo III con nuevas actuaciones de interés general).

1.2. Algunas normas no ambientales con rango de ley de interés desde el punto de vista ambiental

Aunque no se trata de leyes cuyo objeto sea la protección del medio ambiente, vamos a referirnos brevemente a algunos aspectos del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, y de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

A. La adopción de medidas en materia de eficiencia energética: el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa

El Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia²⁶, se enmarca en el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 2014, que contempla un paquete de medidas respetuosas con el objetivo de saneamiento fiscal que impulsen el crecimiento y la competitividad presente y futura de la economía y la financiación empresarial. A través de este real decreto-ley se adoptan las medidas legislativas de carácter urgente necesarias para la ejecución de dicho Plan, además de otras medidas. Todas ellas están dirigidas a aumentar la competitividad y fomentar el funcionamiento eficiente de los mercados y a mejorar la financiación y la empleabilidad. Tres son los ejes fundamentales del Real Decreto-Ley: fomentar la competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados; mejorar el acceso a la financiación; y fomentar la empleabilidad y la ocupación.

²⁶ Actualmente, este real decreto-ley se está tramitando en el Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio). *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, Congreso de los Diputados, X Legislatura, Serie A, núm. 103-1, de 16 de julio de 2014.

Desde la perspectiva que aquí nos interesa, destacamos la inclusión, en el Real Decreto-Ley, de un título, el III (arts. 57 a 86)²⁷, en el que se incluyen medidas urgentes en el ámbito energético “dirigidas a garantizar la sostenibilidad y accesibilidad en los mercados de hidrocarburos, así como a establecer un sistema de eficiencia energética en línea con las directrices europeas”²⁸. En efecto, en este título, integrado por cuatro capítulos, se incluyen medidas relativas a los gases licuados del petróleo (capítulo I — arts. 57 y 58—), a la sostenibilidad económica del sistema de gas natural (capítulo II — arts. 59 a 66—), al sector de hidrocarburos y minas (capítulo III —arts. 67 y 68—) y a la eficiencia energética (capítulo IV —arts. 69 a 86—). En el marco de esta crónica, destacamos especialmente las medidas que se adoptan en materia de eficiencia energética y que suponen la incorporación parcial al derecho español de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, y que crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de materializar el considerable potencial de ahorro de energía no realizado.

Entre las medidas en materia de eficiencia energética que se incluyen, cabe mencionar, en primer lugar, la creación de un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asignará una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro, a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor. El período de duración de este sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética comprenderá desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley hasta el 31 de diciembre de 2020. A raíz del establecimiento de este sistema, el objetivo de ahorro anual, los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados, así como las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia financiera, serán fijados anualmente mediante orden del ministro de Industria, Energía y Turismo. El objetivo de ahorro energético anual que se determine se repartirá entre los sujetos obligados proporcionalmente, en el

²⁷ Este título se dicta al amparo de los artículos 149.1.13 y 25 de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del régimen energético y minero, respectivamente.

²⁸ Apartado VII del preámbulo.

caso de las comercializadoras de gas y electricidad, al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales, y, en el caso de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución al por menor, expresadas en GWh, durante el segundo año anterior al período anual de la obligación.

En segundo lugar, para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, prevé que los sujetos obligados deberán realizar una contribución financiera anual a ingresar por terceras partes, por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera que se establezca, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al que nos referiremos posteriormente. Alternativamente, y en los términos que reglamentariamente fije el Gobierno, prevé que se podrá establecer un mecanismo de acreditación de la consecución de una cantidad de ahorro energético equivalente al cumplimiento de las obligaciones del sistema. Este mecanismo se basará en la presentación de certificados de ahorro energético (CAE) negociables, que resulten de la realización de las actuaciones de eficiencia energética que se definan en un catálogo y que cumplan los requisitos y las condiciones que en dicho catálogo se establezcan, cuya gestión corresponderá al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Para obtener y transmitir certificados de ahorro energético, se deberá estar acreditado ante el sistema de obligaciones de eficiencia energética en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Los sujetos que se acrediten deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones en la cuantía mínima que se establezca mediante real decreto. Este mecanismo comprenderá, asimismo, un sistema de control que incluirá la verificación material de una parte estadísticamente significativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética certificadas.

En tercer lugar, se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, sin personalidad jurídica, cuya finalidad será financiar las iniciativas nacionales de eficiencia energética, en cumplimiento del artículo 20 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. El Fondo, adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Energía, se dedicará a la financiación de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación, información u otras medidas con el fin de aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores, de forma que contribuyan a alcanzar el objetivo de ahorro

energético nacional que establece el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia energética previsto en el artículo 7 de la citada Directiva. También podrán atenderse con cargo a las dotaciones del Fondo los gastos de administración que ocasione su gestión. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética estará dotado con los recursos provenientes de fondos estructurales comunitarios FEDER; las aportaciones de los sujetos obligados por el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en concepto de cumplimiento o liquidación de sus obligaciones de ahorro; otras aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado; y cualquier otro recurso destinado a financiar actuaciones que tengan como objetivo implementar medidas de ahorro y eficiencia energética. Su gestión se asigna al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y su supervisión y control corresponderán al Comité de Seguimiento y Control, adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Energía.

En cuarto lugar, obliga a los proveedores de servicios energéticos a tener suscrito un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, teniendo en cuenta que pueden gestionar actuaciones de cierto riesgo como, entre otras, la ejecución y gestión de proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial y el sector de la edificación.

Por último, incluye un régimen de infracciones y sanciones en materia de eficiencia energética, tipificando una serie de infracciones y sanciones en el ámbito del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética y en materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos. La instrucción de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones administrativas tipificadas en el ámbito del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética y el archivo, tras su resolución, de las actuaciones realizadas corresponden al órgano de la dirección general correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía. Por su parte, la competencia para la imposición de las sanciones relativas a las infracciones en el ámbito del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética corresponderá: al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves; al ministro de Industria, Energía y Turismo para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves; y al secretario de Estado de Energía para la imposición de sanciones leves. En cambio, en

materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos, la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores que se incoen corresponderán a los órganos competentes de las comunidades autónomas.

También desde la perspectiva de la eficiencia energética, cabe mencionar la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Mediante la disposición adicional decimotercera de esta ley se incorpora al ordenamiento jurídico español el artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. De esta forma, se establecen los principios y requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las administraciones públicas integradas en el sector público estatal. Las administraciones públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y que pertenezcan al sector público estatal solamente podrán adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el anexo de esta ley. Esta obligación será aplicable a los contratos de suministro, de servicios y de obras cuyo resultado sea la construcción de un edificio, siempre que tales contratos sean de un valor estimado igual o superior a los umbrales de los contratos que determinan la sujeción a una regulación armonizada establecidos en los artículos 14, 15 y 16 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, será aplicable a la adquisición o arrendamiento de edificios²⁹. Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsará actuaciones encaminadas a conseguir que las distintas entidades del sector público autonómico y local adquieran bienes, servicios y edificios con alto rendimiento energético. Igualmente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llevarán a

²⁹ De acuerdo con la disposición transitoria 6.ª de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, que establece el régimen transitorio de la aplicación de medidas de eficiencia energética: “Lo previsto en la Disposición adicional decimotercera será de aplicación a los expedientes de contratación y de adquisiciones y arrendamiento de inmuebles que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. A estos efectos, se entenderá como fecha de iniciación del expediente la publicación de la correspondiente convocatoria para la adjudicación del contrato o en ausencia de convocatoria la de aprobación de los correspondientes pliegos o documentos equivalentes”.

cabo las actuaciones necesarias para facilitar que los órganos de contratación, en las licitaciones para contratos de servicios con un componente energético importante, puedan evaluar la posibilidad de celebrar contratos de rendimiento energético a largo plazo que permitan valorar el ahorro energético computado en el período total de duración del contrato. A estos efectos, facilitarán a los órganos de contratación, mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, herramientas metodológicas para realizar la evaluación, así como modelos de contrato y cláusulas administrativas de contenido jurídico que deban contener los pliegos que rijan la licitación de este tipo de contratos.

B. La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece un nuevo marco regulador en esta materia. Esta ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones —prevista en el artículo 149.1.21 CE—, si bien las disposiciones dirigidas a garantizar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones se dictan al amparo del artículo 149.1.1 CE, sobre regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y del artículo 149.1.13 CE, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. No estamos, por lo tanto, ante una ley de corte ambiental, sino ante una ley que regula la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia; las obligaciones de servicio público y los derechos y las obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas; la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos; el dominio público radioeléctrico; la administración de las telecomunicaciones; las tasas en este ámbito; y la inspección y el régimen sancionador.

Sin embargo, traemos a colación esta ley, aun sin entrar a analizar íntegramente su contenido, para destacar algunas novedades de interés en relación con los instrumentos de planificación urbanística y el régimen de intervención administrativa en esta materia. En primer lugar, un aspecto especialmente conflictivo de la Ley desde el punto de vista competencial es la exigencia de un informe preceptivo y vinculante al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en los procedimientos de aprobación, modificación o

revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas (art. 35.2). Dicho informe, que deberá emitirse en un plazo máximo de tres meses, versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación a la Ley General de Telecomunicaciones y a la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran. Transcurrido dicho plazo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del instrumento de planificación. A falta de solicitud de este informe, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones. En el caso de que el informe no sea favorable, los órganos encargados de la tramitación de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística dispondrán de un plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción del informe, para remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo sus alegaciones al informe, motivadas por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a la vista de las alegaciones presentadas, emitirá un nuevo informe en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de las alegaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del instrumento de planificación. El informe tiene carácter vinculante, de forma que, si el informe vuelve a ser no favorable, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones.

En segundo lugar, por lo que respecta a los mecanismos de intervención administrativa en este ámbito, la Ley General de Telecomunicaciones mantiene la supresión de licencia o autorización previa para las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, contenida en la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Esta supresión también es aplicable a la instalación de redes públicas de comunicaciones

electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de las anteriores, a las cuales no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado a la administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración. En estos casos, las licencias o autorizaciones serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración en cualquier orden —estatal, autonómico o local— le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinarán la imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (art. 34.6).

Por otro lado, la Ley excluye cualquier tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa por razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales, para la realización, sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, ya

ubicada en dominio público o privado, de actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil.

1.3. Novedades en ámbitos sectoriales diversos

A. Patrimonio natural y biodiversidad

Mediante el Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, se ha aprobado, en aplicación del artículo 14 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020, con una vigencia de seis años desde su entrada en vigor, prorrogándose su aplicación mientras no sea aprobado otro plan que lo sustituya.

El Plan tiene por objeto “el impulso y promoción de un turismo de naturaleza en España, como actividad económica generadora de ingresos y empleo, que ponga en valor la biodiversidad, asegurando la correcta conservación de los valores naturales del territorio y contribuyendo a su utilización sostenible”. La meta principal es desarrollar un turismo de naturaleza sostenible generador de ingresos y empleo que integre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en todos los eslabones de la cadena turística, de forma que se reduzcan los impactos negativos y se aumenten los efectos positivos, creando un producto a la altura de la relevancia del patrimonio natural de España y que, además, contribuya a su conservación.

Con este fin, establece un marco de planificación general para el impulso de un turismo de naturaleza sostenible en España y define cuatro objetivos concretos. El objetivo 1 busca la configuración de un producto turístico sostenible caracterizado por desarrollarse en lugares de la red Natura 2000 (en España, más del 27% del territorio) y otros espacios aptos para este tipo de turismo en donde se realice una gestión planificada y activa del turismo; por existir un compromiso del gestor del espacio para fomentar un turismo de naturaleza sostenible; y por existir un compromiso voluntario de las empresas turísticas y otros actores del entorno con la conservación de los valores naturales del espacio y con la mejora de la sostenibilidad de sus actividades, colaborando con el órgano gestor. El objetivo 2 se centra en la promoción del turismo de naturaleza sostenible en España, que debe focalizarse en aquellos espacios

reconocidos por su especial compromiso con la sostenibilidad del turismo de naturaleza en su gestión y en las actividades empresariales. El objetivo 3 pretende implicar a todos los interesados para establecer y consolidar vínculos que conduzcan a una mejor consideración de la biodiversidad. Y el objetivo 4 busca mejorar los conocimientos, la información y la formación relacionados con el turismo de naturaleza, con el fin de poder conocer el estado y la evolución del turismo de naturaleza en España y su impacto sobre la biodiversidad, la sociedad y la economía, y favorecer el avance hacia los objetivos del Plan Sectorial.

El Plan también incluye un conjunto de acciones asociadas a estos objetivos que contribuirán a su logro. Sus características esenciales son la concertación de intereses de todos los sectores públicos y privados implicados en la conservación de la biodiversidad y el turismo de naturaleza, y la coordinación para optimizar su puesta en marcha.

B. Protección del medio marino

En el ámbito de la protección del medio marino, cabe destacar, en primer lugar, la aprobación, a través de la Orden AAA/702/2014, de 28 de abril³⁰, del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, que forma parte del Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina Accidental, aprobado mediante el Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, y que complementa los planes territoriales establecidos con las comunidades autónomas, con el objetivo de asegurar la coordinación en las actuaciones de lucha contra la contaminación en la costa. Este plan será de aplicación a aquellos casos de contaminación marina accidental o deliberada, cualquiera que sea su origen o naturaleza, que afecte o pueda afectar a la costa, tal y como queda definida en el artículo 2.b) del Real Decreto 1695/2012, y que requiera la intervención de la Administración general del Estado, atendiendo a los criterios de activación establecidos en el Sistema Nacional de Respuesta. En todo caso, podrá ser activado a petición de una comunidad autónoma cuando concurren circunstancias que así lo requieran.

³⁰ Esta orden se dicta de acuerdo con el artículo 149.1.23.^a de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencias para dictar legislación básica del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección del medio ambiente en su territorio (vid. disposición final primera).

En segundo lugar, mediante la Orden AAA/705/2014, de 28 de abril, se crean los cinco comités de seguimiento de las estrategias marinas —uno para cada demarcación marina española— previstos en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, para facilitar la coordinación entre las administraciones estatal y autonómicas; y se regulan su composición, funciones y régimen de funcionamiento.

En tercer lugar, también se han aprobado las órdenes AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran zonas de especial protección para las aves en aguas marinas españolas; AAA/1299/2014, de 9 de julio, por la que se aprueba la propuesta de inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la red Natural 2000 de los espacios marinos ESZZ16001 Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León, ESZZ16002 Canal de Menorca, ESZZ12002 Volcanes de fango del Golfo de Cádiz y ESZZ12001 Banco de Galicia; y AAA/1493/2014, de 28 de julio, por la que se modifican la Orden de 4 de abril de 1986, por la que se establece una reserva marina en la isla de Tabarca, la Orden ARM/3841/2008, de 23 de diciembre, por la que se regula la reserva marina de interés pesquero de las islas Columbretes, la Orden ARM/2094/2010, de 21 de julio, por la que se regula la reserva marina de la isla de La Palma y la Orden ARM/1744/2011, de 15 de junio, por la que se regula la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar.

C. Aguas

En materia de aguas, destaca, por una parte, la aprobación de los últimos planes hidrológicos de competencia del Estado para dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua. Nos referimos a los reales decretos 270/2014, de 11 de abril, 594/2014, de 11 de julio, y 595/2014, de 11 de julio, mediante los cuales se aprueban, respectivamente, los planes hidrológicos de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, de la Demarcación Hidrográfica del Segura y de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Por otra, la aprobación del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura³¹. En

³¹ Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.22.ª CE, que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. No obstante, la disposición final primera tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª CE, que reserva al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (disposición final segunda).

él se fijan las reglas de explotación de este trasvase, los mecanismos de predicción de aportaciones mensuales, los valores mensuales de los consumos de referencia de las aguas trasvasadas por usos y zonas de riego, los desembalses máximos de referencia y las características y periodicidad de los informes de seguimiento, asegurándose el no incremento del gasto público y el respeto a las asignaciones, las reservas y los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo. Asimismo, a través de su disposición final primera, modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. Concretamente, modifica el apartado 1 del artículo 69 para que en la redacción del Plan Hidrológico Nacional se contemplen y especifiquen las transferencias de recursos entre distintas demarcaciones hidrográficas, estableciéndose las condiciones a que han de ajustarse; se incorpore en su contenido un catálogo de los trasvases existentes en España, que al menos se extenderá a todos aquellos que no puedan ser considerados de pequeña cuantía; y se especifiquen las características funcionales de cada uno de ellos y la norma jurídica que los habilita.

D. Protección de la atmósfera

En materia de protección de la atmósfera, cabe mencionar el Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Concretamente, modifica la disposición transitoria única del Real Decreto 102/2011 y suprime para el sulfuro de carbono la exigencia del cumplimiento de la concentración media en treinta minutos. Por otro lado, mantiene la concentración media en veinticuatro horas, que no debe superarse, aunque se modifica el valor fijado, estableciéndose ahora —siguiendo lo previsto en la Directiva 2009/161/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2009, por la que se establece una tercera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000— el de 70 microgramos por metro cúbico como objetivo de calidad medio en veinticuatro horas para la protección de la salud.

E. Energías renovables

En estos últimos meses, dentro del proceso de reforma del sector eléctrico iniciado por el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y que ha continuado con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se han aprobado varias normas reglamentarias de interés en relación con las fuentes de energía renovables.

Mediante la aprobación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio³², el Consejo de Ministros avanza en el desarrollo del mandato al Gobierno contenido en las dos normas con rango de ley mencionadas y regula el nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que ha suscitado una gran polémica en el sector. Esta norma se estructura en cinco títulos, en los que, además de incluirse una serie de disposiciones generales (título I), se regulan los derechos y las obligaciones de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (título II); la participación en el mercado eléctrico (título III); el régimen retributivo específico de estas instalaciones (título IV); los procedimientos y registros administrativos (título V); y la representación (título VI)³³.

El Real Decreto establece un nuevo sistema de retribución para las instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, de cogeneración y de residuos que sustituye al anterior sistema de primas. Dada la imposibilidad de realizar un estudio completo de esta norma, de una gran complejidad técnica, en el marco de esta crónica nos limitamos a destacar dos aspectos. En relación con su ámbito de aplicación, se incluyen todas las instalaciones a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos [pertenecientes a la categoría a): productores que utilicen la

³² Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.^a y 25.^a de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético. Asimismo, lo dispuesto en los capítulos I y II del título V se dicta al amparo del artículo 149.1.22.^a de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad (disposición final primera).

³³ Para un análisis de las principales modificaciones que supone este real decreto, vid. MENDOZA LOSANA, A. I., “Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Un nuevo y conflictivo paso en la reforma del sector eléctrico español”, en Análisis Gómez-Acebo&Pombo, junio 2014. Recuperado el 15 de octubre de 2014 de <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/real-decreto-413-2014-de-6-de-junio-por-el-que-se-regula-la-actividad-de-produccion-de-energia-electrica-a-partir-de-fuentes-de-energia-renovables-cogeneracion-y-residuos.pdf>.

cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales; categoría b): instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no fósiles; o categoría c): instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b), instalaciones que utilicen combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados subgrupos e instalaciones que utilicen licores negros], y ya no existe la anterior separación entre régimen ordinario y régimen especial, conceptos eliminados por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. Sin embargo, el régimen retributivo específico regulado en esta norma solo será de aplicación a determinadas instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, que deberán cumplir requisitos adicionales y estar sujetas a otros procedimientos relacionados con el otorgamiento de dicho régimen.

En cuanto al sistema de retribución, el Real Decreto regula el régimen retributivo específico para fomentar la producción de energía a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, que podrá ser percibido por las instalaciones adicionalmente a la retribución que les corresponda por su participación en el mercado de producción de energía eléctrica a través de cualquiera de sus modalidades de contratación. Este régimen será de aplicación a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos que no alcancen el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que les permitan competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado obteniendo una rentabilidad razonable, referida a la instalación tipo que en cada caso sea aplicable. La novedad principal radica en que se abandona la retribución puramente variable utilizada hasta la fecha (primas y tarifas reguladas) por un esquema que refleje más fielmente la estructura real de costes de la actividad, donde algunos son fijos y otros puramente variables. Este nuevo régimen retributivo será de aplicación tanto a las instalaciones nuevas como a las existentes. Para las nuevas, su otorgamiento se establecerá mediante procedimientos de concurrencia competitiva que se ajustarán a los principios de transparencia, objetividad y no discriminación. Las ya existentes que tuvieran reconocido un régimen económico primado también percibirán este nuevo régimen retributivo específico. Excepcionalmente, el régimen retributivo específico podrá incorporar, además, un incentivo a la inversión cuando su instalación suponga una reducción significativa de los costes en los sistemas de los territorios no peninsulares.

Este incentivo se establecerá en función de la reducción de los costes que genere y no tanto de las características de la instalación tipo, mejorando la rentabilidad de las instalaciones que tengan otorgado dicho incentivo.

Como complemento del Real Decreto 413/2014, se han aprobado la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, con la que, según afirma su preámbulo, “se completa el cambio de modelo de retribución de las energías renovables, de cogeneración y residuos y se da estabilidad financiera al sistema con carácter definitivo, al tiempo que se garantiza una rentabilidad razonable a las instalaciones”; la Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de inscripción automática de determinadas instalaciones en el registro de régimen retributivo específico previsto en el título V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; y la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. Tanto el Real Decreto 413/2014 como la Orden IET/1045/2014 han sido recurridos ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

F. Una nueva regulación para el Consejo Nacional del Clima

En el ámbito organizativo, a través del Real Decreto 415/2014, de 6 de junio, que deroga el Real Decreto 1188/2001, de 2 de noviembre, se establece una nueva regulación de la composición y funciones del Consejo Nacional del Clima —órgano colegiado interministerial, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente—, con el fin de “convertir este órgano en un verdadero foro institucional de participación de todas las administraciones públicas, así como de las organizaciones y entidades representativas de intereses sociales y ambientales en la elaboración y seguimiento de las políticas sobre cambio climático promovidas por el Estado”.

Entre las funciones de este órgano se encuentran las siguientes: informar y facilitar la participación de todos los agentes implicados en la elaboración y el seguimiento de las políticas y medidas sobre cambio climático promovidas por el Estado; conocer y formular recomendaciones en relación con planes, programas y líneas de actuación en materia de cambio climático; promover el desarrollo de acciones de recopilación, análisis, elaboración y difusión de información; conocer las políticas de la Unión Europea y el estado de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático; y cualquier otra función que, en el marco de sus competencias, se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria.

En cuanto a su composición, el Consejo Nacional del Clima está constituido por la presidencia (ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), la vicepresidencia (secretario de Estado de Medio Ambiente), un secretario (el titular de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático, que tendrá la condición de vocal con todos los derechos inherentes a tal condición) y los vocales (por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el subsecretario, el secretario general técnico y los directores generales de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, de Desarrollo Rural y Política Forestal, de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y del Agua, el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología y el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales; un representante de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y Seguridad Social, de la Presidencia, de Economía y Competitividad, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y dos representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, designados por los respectivos ministros entre los directores generales de sus departamentos; un representante por comunidad autónoma y otro por cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla, designados por los órganos autonómicos competentes; tres representantes designados por la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación; dos representantes designados por las organizaciones representativas de empresarios de mayor implantación; un representante designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio; un vocal con amplia experiencia en materia medioambiental designado por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; cinco vocales designados por las organizaciones ecologistas de mayor implantación; tres vocales designados por asociaciones de los sectores de la agricultura,

ganadería, pesca e industrias alimentarias; dos vocales pertenecientes al ámbito de la investigación designados por el ministro de Economía y Competitividad, que deberán tener la condición de expertos en las materias relacionadas con el cambio climático; un vocal perteneciente al ámbito de la docencia universitaria designado por el ministro que tenga dicha competencia, que deberá tener la condición de experto en las materias relacionadas con el cambio climático; el director general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas; dos vocales designados por los sindicatos más representativos a nivel nacional; y dos vocales designados a través del Consejo de Consumidores y Usuarios)³⁴. El nombramiento de los miembros del Consejo Nacional del Clima se realizará por Orden del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La duración de su mandato será de tres años, pudiendo ser renovado dicho mandato por períodos de tiempo iguales.

La Oficina Española del Cambio Climático ejercerá las funciones de Secretaría, asumiendo tareas de apoyo técnico y administrativo a los órganos que integran el Consejo Nacional del Clima, así como la gestión ordinaria de las funciones que este tiene encomendadas de acuerdo con las directrices aprobadas por el Pleno.

Con relación al funcionamiento del Consejo Nacional del Clima, funciona en Pleno, que se reunirá, al menos, una vez al año, si bien el Pleno podrá acordar la creación, modificación o extinción de grupos de trabajo, siendo el número máximo de grupos de trabajo de tres por mandato. Para la válida adopción de acuerdos, es necesario que voten a favor la mitad más uno de los miembros del Pleno, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. En cualquier caso, el funcionamiento de este órgano y de sus grupos de trabajo no supondrá incremento alguno del gasto público y será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios ya existentes en el Departamento (disposición adicional segunda).

1.4. Otras normas de interés

³⁴ En cuanto a la constitución del Consejo Nacional del Clima, la disposición adicional tercera del Real Decreto 415/2014 prevé que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este real decreto, las diferentes administraciones públicas, instituciones y organizaciones deberán proponer a sus representantes en el Consejo Nacional del Clima. A tal efecto, el titular de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático, en su calidad de secretario del Consejo Nacional del Clima, les comunicará, con antelación suficiente, la apertura del plazo para proponer a sus representantes.

Además de las normas reseñadas, en el período objeto de análisis pueden mencionarse otras normas de interés en ámbitos sectoriales diversos. Destacamos, entre ellas, en materia de minas, el Real Decreto-Ley 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada Aznalcóllar. En materia de información ambiental, la Orden PRE/1597/2014, de 5 de septiembre, por la que se establecen las cuantías y se dictan normas sobre la gestión y el cobro de la tasa por suministro de información ambiental en el ámbito de la Administración general del Estado y sus organismos públicos, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En el ámbito de la pesca, la Orden AAA/1504/2014, de 30 de julio, por la que se establecen zonas protegidas de pesca sobre determinados fondos montañosos del Canal de Mallorca y al este del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. En materia de tributación ambiental, la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 “Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación”, y se establece la forma y procedimiento para su presentación. Y, en materia de energía eléctrica, además de las ya citadas en esta crónica, el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23; el Real Decreto 417/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico; y el Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento de presupuestación, reconocimiento, liquidación y control de los extracostes de la producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Por último, mencionamos también el Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014); y el Real Decreto 525/2014, de 20 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6).

2. Derecho y políticas ambientales autonómicas

En el período examinado, son pocas las novedades normativas en materia ambiental que se han producido en Cataluña. No se ha aprobado ninguna norma con rango de ley específicamente ambiental. De hecho, únicamente cabe mencionar la aprobación de dos leyes con alguna incidencia en la materia ambiental: la Ley 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego, con el fin de permitir las actividades de juego y de apuestas en el centro recreativo y turístico de Vila-seca y Salou, lo que significa abrir el camino a la puesta en marcha del macroproyecto de casinos, hoteles y tiendas Barcelona World en esta área; y la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la Seguridad Industrial de los Establecimientos, las Instalaciones y los Productos, cuyo objeto es regular, dentro del ámbito de competencias de la Generalitat, el régimen jurídico aplicable a la seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos en el territorio de Cataluña, incluyendo la vigilancia del mercado en esta materia.

En el ámbito reglamentario, las normas más destacables son el Decreto 41/2014, de 1 de abril, del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña; el Decreto 56/2014, de 22 de abril, relativo a la homologación de métodos de captura en vivo de especies cinegéticas depredadoras y de especies exóticas invasoras depredadoras y la acreditación de las personas usuarias de dichos métodos; y el Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística.

En cuanto a los proyectos de ley en trámite, en este período ha iniciado su tramitación el Proyecto de Ley de ordenación de las actividades de espectáculos públicos y recreativas; y continúa su curso la tramitación del Proyecto de Ley de creación del impuesto sobre las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno a la atmósfera que produce la aviación comercial, del impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica por su incidencia en el medio ambiente y del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera.

Paralelamente, se están gestando varias iniciativas normativas de gran interés en materia ambiental. En primer lugar, el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales ha elaborado el Anteproyecto de Ley de simplificación de la actividad

administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña, sometido a información pública durante un plazo de 15 días hábiles mediante Edicto de 3 de septiembre de 2014³⁵. Este anteproyecto incluye medidas de simplificación administrativa en el ejercicio de las actividades económicas e incorpora algunas modificaciones importantes en la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades, por cuanto modifica los anexos II y III de esta ley, ampliando las actividades que estarán sometidas al régimen de comunicación en lugar de al de licencia. Asimismo, modifica la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, y la Ley de Urbanismo, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, a los efectos de compatibilizar la simplificación administrativa con la seguridad de personas y bienes. En segundo lugar, también se ha sometido a información pública el Proyecto de Decreto de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno³⁶, para dar desarrollo a la Ley 6/2001, de 31 de mayo. En tercer lugar, el Gobierno catalán prepara una ley pionera en España de cambio climático para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 25% el año 2020 y un 80% el 2050. Con esta finalidad, ya ha aprobado la memoria previa al inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Cataluña y ha puesto en marcha el proceso participativo de la Ley³⁷, con el objetivo de que el Gobierno pueda proceder a la aprobación del Proyecto de Ley a finales de año. Por último, el Gobierno también ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de Ley de Prevención, Control y Calidad Ambiental, que sustituirá a la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades, y que nace con la voluntad de racionalizar y simplificar trámites en la intervención sobre las actividades económicas.

³⁵ Publicado en el DOGC núm. 6702, de 8 de septiembre de 2014.

³⁶ Vid. DOGC núm. 6712, de 23 de septiembre de 2014.

³⁷ El 10 de junio de 2014 se publicó en la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad el documento base de la norma (http://canvclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/tallers_ciutadans/documentacio/ — última consulta, 30 de septiembre de 2014—) para que todos los ciudadanos pudiesen intervenir a través de un formulario en línea. Además, se han realizado diferentes sesiones territoriales que incluyen también encuentros con el mundo de la Administración local. Este proceso participativo se ha realizado en colaboración con el Programa de Innovación y Calidad Democrática del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales.

En el ámbito de la planificación, el Gobierno ha aprobado el Plan General de Política Forestal 2014-2024 y el Plan de Actuación para la mejora de la calidad del aire en 40 municipios del ámbito metropolitano de Barcelona.

Desde el punto de vista de las iniciativas y actuaciones de interés político, cabe destacar, por una parte, la aprobación por parte del Gobierno de un nuevo modelo de saneamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana de Barcelona, al que nos referiremos más adelante. Por otra, el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Josep Enric Llebot, como representante de la copresidencia de la Xarxa de Governos Regionals per al Desenvolupament Sostenible, ha firmado en Nueva York, en el marco de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, un compromiso voluntario para la reducción de gases de efecto invernadero. El documento, suscrito por los miembros de esta organización, proporcionará una evaluación precisa de la contribución global de los gobiernos subnacionales para la reducción de las emisiones de CO₂ y ayudará a luchar contra el cambio climático. De este modo, Cataluña se compromete a nivel internacional a evaluar su contribución a la reducción de los gases de efecto invernadero.

2.1. La nueva regulación del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible

El Decreto 41/2014, de 1 de abril, ha introducido una nueva regulación del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (en adelante, CADS) con el fin de reforzar su carácter de órgano de asesoramiento estratégico y de consulta del Gobierno y mejorar su funcionamiento a partir de la experiencia de gestión acumulada en sus quince años de existencia.

El CADS es un órgano colegiado, adscrito al Departamento de Presidencia, que tiene como finalidad asesorar al Gobierno en relación con las políticas y actuaciones que tengan incidencia sobre el desarrollo sostenible. En cuanto a sus funciones, el Decreto recoge las de asesorar al Gobierno en el ámbito del desarrollo sostenible y, especialmente, en la integración de la sostenibilidad en las políticas y los instrumentos de planificación territorial y sectorial, en proyectos legislativos y normativos y en proyectos o iniciativas estratégicos impulsados por el Gobierno; analizar las políticas estratégicas para el desarrollo sostenible impulsadas por el Gobierno, especialmente las relativas a la energía, el agua, la seguridad alimentaria, el cambio climático y la economía verde, y formular propuestas en estos ámbitos; promover la transferencia de conocimiento y el diálogo entre el Gobierno, el mundo académico y la sociedad civil en

el ámbito del desarrollo sostenible; asesorar al Gobierno en el diseño y la ejecución de actuaciones para promover la educación para la sostenibilidad; y promover la implicación de los sectores económicos y sociales en el proceso de desarrollo sostenible de Cataluña. Los informes y las propuestas que realice el CADS son emitidos por iniciativa propia o a solicitud del consejero del Gobierno competente por razón de las materias respectivas, y no tienen carácter vinculante.

El CADS está integrado por un presidente, nombrado por el Gobierno entre personas de reconocido prestigio, y un mínimo de diez y un máximo de quince vocalías, nombradas por el Gobierno a propuesta del presidente del Consejo entre personas de reconocido prestigio o representativas de los diferentes sectores económicos y sociales. Los miembros son nombrados por un período de dos años y pueden ser nombrados de nuevo por períodos adicionales de dos años. El presidente debe nombrar a un vicepresidente de entre las vocalías, que sustituye al presidente en casos de ausencia, impedimento o enfermedad. El Gobierno también tiene que nombrar, a propuesta del presidente del Consejo, a un director, que tiene rango de director general, asiste a las sesiones del Consejo con voz y sin voto y es responsable del funcionamiento ordinario del Consejo, de las convocatorias de las sesiones y de la ejecución de los acuerdos que se adopten.

En cuanto a su funcionamiento, el CADS actúa con autonomía funcional para garantizar su objetividad e imparcialidad. Actúa en pleno o en comisiones especializadas por razón de los asuntos a tratar y puede crear grupos de personas expertas sobre temáticas concretas, con carácter estable o puntual, cuyo funcionamiento debe estar regulado por un reglamento interno. Las recomendaciones de los grupos de personas expertas son consultivas y no tienen carácter vinculante para el Consejo. Ni los integrantes del CADS ni los miembros de los grupos de expertos percibirán dietas por la asistencia a las reuniones plenarias o en comisión, aunque se prevé que puedan pagarse indemnizaciones por sus desplazamientos y alojamiento.

2.2. La regulación de la homologación de métodos de captura en vivo de especies cinegéticas depredadoras y de especies exóticas invasoras depredadoras

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Decreto que homologa los métodos de captura en vivo de determinadas especies cinegéticas para evitar desequilibrios y alteraciones de los ecosistemas naturales. Se trata del Decreto 56/2014, de 22 de abril,

que tiene por objeto declarar los métodos homologados de captura en vivo de especies cinegéticas depredadoras o de especies exóticas invasoras depredadoras; establecer el procedimiento para la homologación de nuevos métodos que cumplan los requerimientos de bienestar y selectividad para su captura; regular la acreditación de los usuarios de métodos de captura homologados; y establecer la excepcionalidad del régimen de captura de estas especies. El Decreto se enmarca en el artículo 62.3.g) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con arreglo al cual los métodos de captura de depredadores que sean autorizados por las comunidades autónomas deberán haber sido homologados sobre la base de los criterios de selectividad y bienestar animal fijados por los acuerdos internacionales, y la utilización de estos métodos solo puede ser autorizada mediante una acreditación individual otorgada por la comunidad autónoma; y en las directrices específicas elaboradas en el marco de este precepto conjuntamente por el Estado y las comunidades autónomas en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, acordadas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 13 de junio de 2011 y publicadas en el BOE.

Con esta normativa se homologan los procedimientos de captura de animales depredadores o invasores, de acuerdo con los criterios de selectividad y bienestar animal fijados a nivel internacional. Concretamente, se declaran homologados en Cataluña los métodos de captura siguientes: Collarum (sistema de retención por cable activado o propulsado por el mismo animal y que lo retiene por el cuello); lazo con tope y cierre libre dispuesto en ventanas; lazo con tope americano dispuesto en ventanas; lazo con tope americano dispuesto al paso; y caja metálica. Ello no excluye la posibilidad de homologar en el futuro, ya sea de oficio o a instancia de las personas interesadas, nuevos métodos de captura de especies depredadoras, ya sean cinegéticas o exóticas invasoras, o de modificar las homologaciones declaradas en función de los avances científicos que se vayan produciendo en el transcurso del tiempo.

El Decreto exige, además, para la utilización de métodos homologados para la captura de especies cinegéticas o exóticas invasoras depredadoras, la obtención de una acreditación que la dirección general competente en materia de medio natural expide a las personas que superan el correspondiente curso. Ello supone una novedad, ya que hasta el momento las capturas las podía realizar cualquier persona con una licencia de caza.

2.3. El Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística

Dada la estrecha conexión existente entre la protección del medio ambiente y el urbanismo, también debe mencionarse en esta crónica la aprobación, mediante el Decreto 64/2014, de 13 de mayo, del Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística. Con la aprobación de esta norma se da cumplimiento al mandato de la disposición final primera de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto (en adelante, TRLU), de adaptar el Reglamento del TRLU al nuevo marco legal. Tras descartarse la elaboración de un texto reglamentario único, la opción gubernamental ha sido la de dividir el desarrollo de la Ley de Urbanismo según las materias que la constituyen dotadas de sustantividad propia. En esta línea, este reglamento desarrolla fundamentalmente los títulos sexto y séptimo del TRLU, relativos a la intervención en la edificación y el uso del suelo y del subsuelo y a la protección de la legalidad urbanística respectivamente, que tradicionalmente han constituido la parte del ordenamiento jurídico urbanístico que regula los instrumentos de intervención administrativa destinados a mantener el orden social en la materia. Al desarrollo de los títulos mencionados se añade el desarrollo de los artículos 48, 49, 50 y 54 del TRLU, relativos a los procedimientos de autorización de determinadas actuaciones en suelo no urbanizable y suelo urbanizable no delimitado y de obras y usos provisionales que, a pesar de estar situados en el título segundo de la Ley, relativo al régimen urbanístico del suelo, regulan aspectos procedimentales directamente relacionados con la materia que es objeto de este reglamento.

El Decreto, de gran extensión (152 artículos), sistematiza la materia sobre protección de la legalidad urbanística que regula. A estos efectos, se estructura en cuatro títulos. En el título preliminar se delimitan su objeto y los conceptos de legalidad urbanística y de protección de la legalidad urbanística, configurada esta protección a partir de su triple función preventiva, reparadora y retributiva con relación a las transgresiones del ordenamiento jurídico urbanístico. El título primero regula la intervención en el uso del suelo y en la ejecución de obras, incluyendo la regulación de las licencias urbanísticas, de la comunicación previa y de las órdenes de ejecución y supuestos de ruina. El título segundo se centra en la intervención para restablecer la legalidad urbanística vulnerada y en él se contienen previsiones sobre el régimen jurídico de la inspección urbanística y

de la protección de la legalidad urbanística vulnerada, relativa a los instrumentos de intervención administrativa destinados a restaurar la realidad física alterada y el orden jurídico vulnerado por actos ilícitos. Por último, el título tercero regula el régimen sancionador en este ámbito.

Por otro lado, el Decreto también modifica el apartado 1 del artículo 20 y los apartados 2 y 3 del artículo 22 del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística, con el fin de hacerlos coherentes con las determinaciones del TRLU vigentes relativas a la intervención de las comisiones territoriales de urbanismo en los procedimientos de aprobación de diversas actuaciones en suelo no urbanizable y su competencia en materia de paisaje.

2.4. Otras normas de interés

Además de las reseñadas, en el período objeto de análisis se han aprobado algunas otras normas de interés desde la perspectiva ambiental. Destacamos, entre otras, en primer lugar, la Orden TES/107/2014, de 31 de marzo, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes que gestiona el Departamento de Territorio y Sostenibilidad. En segundo lugar, la aprobación de otras órdenes en ámbitos diversos (Orden AAM/167/2014, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden AAM/388/2012, de 23 de noviembre, y se convocan las ayudas para la financiación de actuaciones en los espacios naturales protegidos de Cataluña para los años 2014 y 2015; Orden AAM/177/2014, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden AAM/111/2013, de 24 de mayo, por la que se desarrollan las medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales relativas a la actividad agrícola; Orden TES/184/2014, de 6 de junio, por la que se regula el Premio Cataluña de Ecodiseño; y Orden AAM/272/2014, de 25 de agosto, por la que se modifica la duración del Plan Piloto de recolección de setas dentro del ámbito del Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet y de su zona de influencia, aprobado por la Orden AAM/254/2012, de 31 de agosto). En tercer lugar, varias órdenes a través de las cuales se aprueban las bases reguladoras de ayudas y subvenciones en diferentes ámbitos (Orden AAM/96/2014, de 25 de marzo, por la que se adaptan diversas bases reguladoras de ayudas gestionadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural a la modificación de la

Ley de Finanzas Públicas efectuada por la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público; Orden AAM/97/2014, de 24 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de defensa forestal (ADF) y se convocan las correspondientes a 2014; Orden AAM/115/2014, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden AAM/251/2011, de 5 de octubre, y se convocan para el año 2014 las ayudas a la gestión forestal sostenible para fincas de titularidad pública destinadas a la redacción de instrumentos de ordenación forestal, la mejora de infraestructuras, las actuaciones silvícolas, las infraestructuras en la prevención de incendios forestales y la transformación y comercialización de los productos forestales; y Orden TES/224/2014, de 18 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro del tercer sector ambiental de Cataluña para la financiación de actuaciones y proyectos de educación y sensibilización ambiental).

2.5. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente

A. El nuevo modelo de saneamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana de Barcelona

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado un decreto-ley que permitirá formalizar un acuerdo con el Área Metropolitana de Barcelona (en adelante, AMB) para crear un nuevo modelo de saneamiento de aguas residuales. Se trata del Decreto-Ley 2/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del AMB. El Decreto-Ley da una nueva redacción a la disposición final segunda de la Ley 31/2010 y establece que el Área Metropolitana de Barcelona realizará un pago único a la Agencia Catalana del Agua que compensará el importe de las inversiones realizadas con contribuciones de la Administración Hidráulica de Cataluña para la construcción de las infraestructuras de saneamiento en alta del ámbito territorial que establece el artículo 2 de esta ley. El importe de este pago único se determinará en el convenio de colaboración al que hace referencia el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley³⁸, o en el

³⁸ Este apartado, tras la modificación efectuada por el Decreto-Ley 2/2014, establece lo siguiente:

“Atendiendo lo que dispone el apartado 1 y la titularidad de los servicios establecidos en el artículo 14 C, que conforman actualmente el servicio metropolitano del ciclo integral del agua, la Agencia Catalana del Agua y el Área Metropolitana de Barcelona establecerán, mediante la suscripción de un convenio de

convenio específico que puedan suscribir a tal efecto la Agencia Catalana del Agua y el Área Metropolitana de Barcelona, que deberá ser aprobado por el Gobierno. El Decreto-Ley ha sido validado por el Parlament de Catalunya³⁹.

El acuerdo que la Agencia Catalana del Agua, con arreglo a lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 31/2010, suscribirá con la AMB, que legalmente es una entidad local del agua, prevé la aportación de 800 millones de euros a la Generalitat como compensación por las infraestructuras de saneamiento realizadas hasta el momento y la cesión de un porcentaje del canon del agua a la AMB durante un período máximo de 30 años para el mantenimiento y la operación de los sistemas de saneamiento. De esta forma, desde el Gobierno catalán se afirma que la Generalitat obtendrá un ingreso extraordinario que permitirá reducir parte de su déficit y reestructurar el endeudamiento de la Agencia Catalana del Agua y avanzar tres años, a partir de 2015, la ejecución de su plan de inversiones. Además, se garantiza que la AMB podrá ejercer sus competencias de forma autónoma en un marco de funcionamiento estable, sin depender de las asignaciones de fondos que hasta ahora se destinaban anualmente. También permitirá a la AMB hacer frente a nuevas necesidades de inversión, fruto del crecimiento de los municipios, al disponer de los recursos correspondientes de forma autónoma.

colaboración que debe ser aprobado por el Gobierno, un marco de atribución de recursos procedentes del canon del agua para hacer frente a los gastos de explotación, de reposición y de inversión de los sistemas de saneamiento en alta, así como de las instalaciones asociadas, incluidas las de aguas pluviales, y aquellos tipos de actuaciones en el medio de interés metropolitana que se concreten en el convenio.

El convenio de colaboración contendrá:

- a) Los mecanismos de control, coordinación y colaboración que se deban desarrollar entre las partes otorgantes para el ejercicio adecuado de sus respectivas competencias, incluyendo la asunción por parte del AMB, durante el periodo de vigencia del convenio, de la competencia prevista en el artículo 8.2.c del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña en relación exclusivamente con las instalaciones y los servicios públicos objeto del convenio.
- b) El régimen jurídico de la atribución de recursos provenientes del canon del agua, que a efectos de gestión podrá dividirse en varios tramos, así como los regímenes específicos de pago, garantías y cesiones de la atribución y de los recursos mencionados, incluyendo las que comprendan los derechos y obligaciones derivados del convenio.
- c) La duración del convenio, que no podrá ser superior a treinta años, y el momento de la efectividad de las diferentes previsiones establecidas en el convenio.
- d) El régimen específico de responsabilidades en el caso de extinción anticipada del convenio, así como el régimen de penalizaciones”.

³⁹ Vid. Resolución 737/X del Parlament de Catalunya, de validación del Decreto-Ley 2/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona (DOGC de 16 de julio).

Cuando se formalice este acuerdo, las depuradoras del área metropolitana pasarán de estar gestionadas por la Agencia Catalana del Agua a estarlo por la AMB.

B. La aprobación del Plan General de Política Forestal 2014-2024

Mediante el Acuerdo GOV/92/2014, de 17 de junio, se aprueba el Plan General de Política Forestal 2014-2024, que tiene el carácter de plan territorial sectorial. Este plan tiene como objeto establecer las directrices técnicas para la ejecución de una política forestal integral en el conjunto del territorio de Cataluña, de acuerdo con lo que dispone el artículo 7.1 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña. La finalidad no es otra que establecer la ordenación de los terrenos forestales de Cataluña para asegurar la conservación y garantizar la producción de materias primas, potenciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y mantener las condiciones que permitan un uso recreativo y cultural de estos terrenos. Para cumplir con esta finalidad y hacer frente a los retos actuales del contexto forestal catalán e internacional, se establecen cinco objetivos específicos: promover la gestión activa de los terrenos forestales y la mejora de la accesibilidad a estos como una necesidad para potenciar sus funciones socioeconómicas y ambientales y fomentar la conservación de la biodiversidad (prevención de riesgos naturales como, por ejemplo, los incendios forestales); dar apoyo a la propiedad y la industria forestales como principales agentes del sector económico, buscando fórmulas de organización de la oferta y la demanda (asociacionismo, cooperativismo); mejorar la percepción social de la gestión forestal sostenible y promover el uso de sus productos; fomentar el desarrollo, la innovación, la transferencia de tecnología y la tecnificación de los procesos productivos del sector forestal; y promover una planificación eficiente de los terrenos forestales y potenciar la coordinación e incorporación de los valores económicos y ambientales forestales en otras planificaciones sectoriales para fomentar sinergias.

Para cumplir estos objetivos, el Plan se estructura en 6 ejes estratégicos (planificación, información y conocimiento de los recursos forestales para garantizar su persistencia; gestión preventiva de riesgos naturales; dinamización del sector forestal productivo y creación de ocupación; conservación de los valores ecológicos y funcionales de los espacios y recursos naturales; gestión de la función protectora de los terrenos forestales; mejora de la gobernanza y participación de la propiedad privada en la conservación y mejora del patrimonio natural), 15 líneas de acción y un total de 102 acciones operativas

a realizar a lo largo de los 10 años de desarrollo. Entre las acciones, hay acciones operativas, entre las cuales se encuentran las acciones programables (aquellas que se pueden acotar presupuestariamente y cuyo calendario de ejecución puede establecerse) y las no programables (acciones a tener en cuenta y que deben desarrollarse), y acciones de apoyo, que corresponden al ámbito de la formación, investigación y transferencia o al ámbito de la comunicación y divulgación.

Asimismo, el Plan establece las directrices de política forestal de Cataluña, que son aspectos a considerar para la gestión forestal y de aplicación para el conjunto de los terrenos forestales de Cataluña y que deben ser desarrolladas en los documentos de planificación forestal que prevé la legislación forestal y, en general, en el ejercicio de la gestión forestal del país. Concretamente, se recogen ocho grupos de directrices: relativas a herramientas e instrumentos de planificación para la gestión de los terrenos forestales; para garantizar la producción de los terrenos forestales mediante el desarrollo socioeconómico del territorio y la innovación del sector forestal catalán; para la conservación y mejora de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales mediante la prevención de los riesgos naturales y el desarrollo de estrategias adaptativas ante el cambio climático; para favorecer el mantenimiento y la conservación de la biodiversidad biológica; para favorecer la función protectora de los terrenos forestales y la gestión eficiente del ciclo del agua; para respetar los derechos de la propiedad forestal, mejorar la proyección social de la gestión forestal y fomentar el uso responsable de los espacios forestales; para la evaluación ambiental estratégica; y de compatibilidad de los usos de los terrenos forestales.

En cuanto a su presupuesto, el presupuesto medio anual por ejes estratégicos es el siguiente: eje 1, planificación, información y conocimiento, 6.750.000 euros (12,72%); eje 2, gestión preventiva de riesgos naturales, 10.620.000 euros (20,01%); eje 3, dinamización de la producción, 18.000.000 euros (33,92%); eje 4, conservación de los valores ecológicos, 10.300.000 euros (19,41%); eje 5, gestión de la función protectora de los bosques sobre el suelo y gestión del ciclo del agua, 6.000.000 euros (11,31%); y eje 6, gestión de los usos públicos (2,64%).

C. La aprobación del Plan de Actuación para la mejora de la calidad del aire en las zonas de protección especial del ambiente atmosférico

Mediante el Acuerdo GOV/127/2014, de 23 de septiembre, el Gobierno ha aprobado el Plan de Actuación para la mejora de la calidad del aire en las zonas de protección especial del ambiente atmosférico. Este plan tiene como objetivo principal reducir las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en un área de 4,3 millones de habitantes de cuarenta municipios, con una superficie territorial de 725 km², de las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental, declarados zona de protección especial del ambiente atmosférico, con el fin de restablecer en esta zona la calidad del aire y respetar los valores límite que determina la normativa europea.

El Plan recoge 166 actuaciones, clasificadas en cuatro grupos, tres según el organismo público que tiene asignada la competencia de su ejecución (actuaciones de la Administración de la Generalitat, del Estado y de los entes locales) y uno al que pertenecen las medidas que se deben adoptar en caso de episodio ambiental de contaminación atmosférica.

Las actuaciones a realizar por la Generalitat de Catalunya se encuentran agrupadas por ámbitos de actuación (transporte terrestre y movilidad; industria, combustión y cogeneración de potencia ≤ 50 MWt; generación eléctrica de potencia ≥ 50 MWt; Aeropuerto de Barcelona-El Prat de Llobregat; Puerto de Barcelona; doméstico; sensibilización, formación, información y comunicación; y fiscal) y objetivos propuestos (potenciar, incentivar e impulsar el transporte público, urbano e interurbano; favorecer el intercambio modal, la diversificación energética y el uso racional del vehículo privado; ambientalización del parque de vehículos; adecuación de las autorizaciones a la nueva normativa ambiental; incentivar las mejoras energéticas en la industria catalana; generación eléctrica con criterios de calidad del aire; reducción de las emisiones del tráfico asociado a los accesos al aeropuerto; seguimiento de la implantación de las actuaciones a ejecutar por parte de AENA; impulso del transporte ferroviario de mercancías; gestión de los controles y las inspecciones de los barcos; uso de combustibles alternativos en actividades portuarias y en su entorno; mejorar la eficacia o ahorro energético e incentivar el uso de combustibles que emitan menos partículas; difundir el Plan de Actuación y sus actuaciones, así como concienciar a la población sobre los niveles de calidad del aire y dar al público en general los instrumentos para evaluar esta situación; y creación y habilitación de mecanismos de

financiación para la mejora de la calidad del aire) con vistas a alcanzar los niveles de calidad del aire que establece la normativa de la Unión Europea.

En cuanto a la Administración del Estado, se distinguen dos bloques de actuaciones: actuaciones del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, Plan AIRE, que incidan en la mejora de la calidad del aire en la zona de protección especial del ambiente atmosférico; y actuaciones sugeridas al Estado por parte de la Generalitat que sería conveniente que el Estado adoptase para la mejora de la calidad del aire.

En el ámbito local, las actuaciones se clasifican en tres bloques: las contempladas en el Acuerdo de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net, aprobado el 7 de marzo de 2013, al que se han adherido quince municipios de la zona de protección especial; las actuaciones de los planes de mejora de la calidad del aire que deben elaborar los municipios de más de 100.000 habitantes, sin perjuicio de que puedan ser adoptadas por municipios con menor número de habitantes; y las que se proponen a todos los municipios independientemente de su población y que pueden ser recogidas en diferentes planes locales.

. 1. Dret estatal aplicable a Catalunya. 1.1. La modificació de la Llei de responsabilitat mediambiental. 1.2. Algunes normes amb rang de llei no ambientals, d'interès des del punt de vista ambiental. A. L'adopció de mesures relacionades amb l'eficiència energètica: el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. B. La Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions. 1.3. Novetats en àmbits sectorials diversos. A. Patrimoni natural i biodiversitat. B. Protecció del medi marí. C. Aigües. D. Protecció de l'atmosfera. E. Energies renovables. F. La nova regulació per al Consell Nacional del Clima. 1.4. Altres normes d'interès. 2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques. 2.1. La nova regulació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. 2.2. La regulació de l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores. 2.3. El Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 2.4. Altres normes d'interès. 2.5. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient. A. El nou model de sanejament d'aigües residuals en l'Àrea Metropolitana de Barcelona. B. L'aprovació del Pla General de Política Forestal 2014-2024. C. L'aprovació del Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire en les Zones de Protecció Especial de l'Àmbit Atmosfèric.

1. Dret estatal aplicable a Catalunya

Durant el període objecte d'anàlisi (de l'1 d'abril de 2014 al 30 de setembre de 2014), en l'àmbit estatal, ha prosseguit l'onada de reformes legislatives des del punt de vista ambiental. A l'aprovació de la reforma de la Llei de costes i de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i de la nova Llei d'avaluació ambiental, hi ha seguit ara la Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la qual es modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, i el Projecte de llei de parcs nacionals (aprovat al setembre pel Congrés i pendent d'aprovació pel Senat) es troba en un estat de tramitació molt avançat. Sens dubte, la Llei 11/2014 és la norma més destacable en aquest període sobre protecció del medi ambient, tot i que s'han aprovat altres normes amb rang de llei amb incidència en aquest aspecte. Entre les quals, destaquem la Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions; el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència; i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

Com és habitual, durant aquests mesos també s'han aprovat diferents normes reglamentàries en àmbits sectorials diversos (patrimoni natural i biodiversitat, protecció del medi marí, aigües, protecció de l'atmosfera, energies renovables...), encara que potser el més destacable és l'aprovació del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, que estableix un nou règim jurídic i econòmic de l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Així mateix, en l'àmbit organitzatiu, s'ha aprovat nova regulació per al Consell Nacional del Clima.

En l'àmbit internacional, mereixen especial menció l'adhesió d'Espanya a la Convenció sobre el dret dels usos dels cursos d'aigua internacionals per a fins diferents de la navegació, fet a Nova York el 21 de maig de 1997⁴⁰; i la ratificació per part d'Espanya del Protocol de Nagoya sobre l'accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la seva utilització al Conveni sobre la diversitat biològica, fet a Nagoya el 29 d'octubre de 2010⁴¹.

En aquest període també s'ha posat de manifest la conflictivitat competencial entre Estat i comunitats autònomes. Bona prova en són els recursos d'inconstitucionalitat promoguts per les Corts d'Aragó⁴² i pel Govern de Catalunya⁴³ contra la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; els recursos d'inconstitucionalitat promoguts contra la Llei de La Rioja 7/2013, de 21 de juny, per la qual es regula la prohibició al territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja de la tècnica de la fractura hidràulica com a tècnica d'investigació i extracció de gas no convencional (recurs sobre el qual ja ha recaigut una sentència del Tribunal Constitucional, la Sentència 134/2014, de 22 de juliol) i contra la Llei foral 30/2013, de 15 d'octubre, del Parlament de la Comunitat

⁴⁰ Instrument d'adhesió a la Convenció sobre el Dret dels Usos dels Cursos d'Aigua Internacionals per a Fins Diferents de la Navegació, fet a Nova York el 21 de maig de 1997. BOE núm. 161, de 3 de juliol de 2014.⁴¹ Instrument de ratificació del Protocol de Nagoya sobre accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la seva utilització al Conveni sobre la diversitat biològica, fet a Nagoya el 29 d'octubre de 2010. BOE núm. 202, de 20 d'agost de 2014.⁴² Per mitjà de la Providència de 8 d'abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 1399-2014, promogut per les Corts d'Aragó, contra la disposició addicional quinzena, la disposició transitòria segona, la disposició derogatòria única, l'apartat tercer i les disposicions finals segona, tercera, quarta i cinquena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 91, de 15 d'abril de 2014).

⁴¹ Instrument de ratificació del Protocol de Nagoya sobre accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la seva utilització al Conveni sobre la diversitat biològica, fet a Nagoya el 29 d'octubre de 2010. BOE núm. 202, de 20 d'agost de 2014.⁴² Per mitjà de la Providència de 8 d'abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 1399-2014, promogut per les Corts d'Aragó, contra la disposició addicional quinzena, la disposició transitòria segona, la disposició derogatòria única, l'apartat tercer i les disposicions finals segona, tercera, quarta i cinquena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 91, de 15 d'abril de 2014).

⁴² Per mitjà de la Providència de 8 d'abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 1399-2014, promogut per les Corts d'Aragó, contra la disposició addicional quinzena, la disposició transitòria segona, la disposició derogatòria única, l'apartat tercer i les disposicions finals segona, tercera, quarta i cinquena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 91, de 15 d'abril de 2014).

⁴³ Mitjançant la Providència de 8 d'abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 1410-2014, promogut pel Govern de Catalunya contra els articles 12.2, 3 i 4; 17; 18; 19.1; 21.2; 23; 24.4 i 5; 25.4; 27.1, 2, 3 i 4; 28.4, 5 i 6; 29; 30.2; 33; 34.1, 2 i 4; 35.1; 39; 40.3 i 4; 43.1, 2, 3 i 4; 44.4, 5 i 7; 45; 46.2 i 3; 47.2.a) i 6; 49; 50.1; la disposició final vuitena.1, ja que invoca l'article 149.1.23a CE com a habilitació competencial dels articles anteriorment esmentats i dels apartats 1 al 7 de l'annex VI; i l'expressió "i supletòria" de la disposició final onzena "in fine", de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 91, de 15 d'abril de 2014).

Foral de Navarra, per la qual es prohibeix al territori de la Comunitat Foral de Navarra l'ús de la fractura hidràulica com a tècnica d'investigació i extracció de gas no convencional⁴⁴; els recursos d'inconstitucionalitat promoguts pel Parlament de Catalunya⁴⁵, pel Govern de Catalunya⁴⁶ i el Consell de Govern d'Andalusia⁴⁷ contra la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat; el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel Govern de la Comunitat de Madrid contra la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes⁴⁸; els recursos d'inconstitucionalitat promoguts pel Consell de Govern d'Andalusia⁴⁹ i per la Junta d'Extremadura⁵⁰ contra el Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten

⁴⁴ Mitjançant la Providència de 9 de setembre de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 4983-2014, promogut pel president del Govern, contra la Llei foral 30/2013, de 15 d'octubre, del Parlament de la Comunitat Foral de Navarra, per la qual es prohibeix al territori de la Comunitat Foral de Navarra l'ús de la fractura hidràulica com a tècnica d'investigació i extracció de gas no convencional. Així mateix, acorda la suspensió de la vigència i l'aplicació de la llei impugnada a partir de la data d'interposició del recurs —28 de juliol de 2014—, per a les parts del procés, i a partir de la publicació del corresponent edicte al *Butlletí Oficial de l'Estat* per als tercers (BOE núm. 223, de 13 de setembre de 2014).

⁴⁵ Mitjançant la Providència de 8 d'abril de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 1397-2014, promogut pel Parlament de Catalunya, contra els articles 14.2 i, per connexió, 23.2; 16; 17; 18 i, per connexió, 5 i la disposició final segona; 19; 20; 26.5; 27 en relació amb la disposició final primera, apartat 3; apartat 1 i, per connexió, 2 de la disposició final tercera i disposició final quarta de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia d'unitat de mercat (BOE núm. 91, de 15 d'abril de 2014).

⁴⁶ Per mitjà de la Providència de 8 d'abril actual, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 1411-2014, promogut pel Govern de Catalunya, contra els articles 5, 6, 14.2, 16 a 20, 23, 26.5, 27, disposició addicional desena i disposicions finals primera, segona, tercera i quarta de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (BOE núm. 91, de 15 d'abril de 2014).

⁴⁷ Per mitjà de la Providència de 8 d'abril actual, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 1454-2014, promogut pel Consell de Govern d'Andalusia contra els articles 6; 14.2; 17, últim incís del paràgraf primer i lletres a) a d); 18.2, lletres b) a f); 19; 20; 21.2 i 3; 23.2; 26; 27; disposició addicional desena i disposicions finals primera, segona i quarta de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (BOE núm. 91, de 15 d'abril de 2014).

⁴⁸ Per la Providència de 6 de maig de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 1976-2014, promogut pel Govern de la Comunitat de Madrid contra els articles 9.1; 10.1, 2, 3 i 4; 12; 13.2 i 3; 15.1 i 3; 16; la disposició transitòria segona i disposició final 12 de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, quan modifiquen els articles 2; 6.3 i 5; 8.3.a) i c); 9.2, 3, 8 i 9; 10.1.b); 12.3; 14.1, 2 i 3; 15.4; 16.1.b) i c); 17.3, 4 i 6 i 39.1 del Text refós de la llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny (BOE núm. 116, de 13 de maig de 2014).

⁴⁹ Per la Providència de 27 de maig de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 2391-2014, promogut pel Consell de Govern d'Andalusia, contra les disposicions transitòria tercera i final segona del Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric (BOE núm. 132, de 31 de maig de 2014).

⁵⁰ Per la Providència de 27 de maig de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 2408-2014, promogut per la Junta d'Extremadura contra l'art. 1,

mesures urgents per garantir l'estabilitat financera en el sistema elèctric; els recursos d'inconstitucionalitat promoguts pel Parlament de Catalunya⁵¹ i pel Govern de Catalunya⁵² contra la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric⁵³; i el recurs d'inconstitucionalitat promogut per més de cinquanta diputats dels grups parlamentaris Socialista; IU, ICV-EUiA, CHA: l'Esquerra Plural; i Unión Progreso y Democracia contra el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència⁵⁴. Així mateix, s'han plantejat davant del Tribunal Constitucional algunes qüestions d'inconstitucionalitat⁵⁵; i, en l'àmbit de

apartats 2 i 3; disposició addicional primera; disposició transitòria tercera; disposicions finals segona i vuitena i disposició derogatòria única del Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric (BOE núm. 132, de 31 de maig de 2014).

⁵¹ Per la Providència de 6 de maig de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 1820-2014, promogut pel Parlament de Catalunya contra els articles 9, 40, 43.5, 46, 51, 52.4 i disposició final segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (BOE núm. 116, de 13 de maig de 2014).

⁵² Per la Providència de 6 de maig de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 1908-2014, promogut pel Govern de Catalunya contra els articles 3.13.a), 9, 15, 33.5, 38.8, 40, 43.5, 46, 51, 52 i disposició final segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (BOE núm. 116, de 13 de maig de 2014).

⁵³ *Vid.* el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 7/2014, de 27 de febrer, sobre la Llei 24/2013, de 26 de setembre (DOGC de 3 d'abril).

⁵⁴ Per la Providència de 23 de setembre de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5099-2014, promogut per més de cinquanta diputats dels grups parlamentaris Socialista; IU, ICV-EUiA, CHA: Esquerra Plural; i Unión Progreso y Democracia contra el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE núm. 235, de 27 de setembre de 2014).

⁵⁵ Destaquem la qüestió d'inconstitucionalitat número 1549-2014 plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, en l'execució definitiva número 116-2012/procediment ordinari 858-2006, en relació amb la Llei 5/2010, de 28 de maig, de modificació de la Llei 4/2000, de 27 de juny, de Declaració del Parc Natural de Fuentes Carrionas i Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palència), per possible vulneració dels articles 9.3 i 24.1, en relació amb l'article 117.3 de la CE, admesa a tràmit pel Tribunal Constitucional, mitjançant la Providència de 6 de maig de 2014 (BOE núm. 116, de 13 de maig de 2014); la qüestió d'inconstitucionalitat número 1591-2014 plantejada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa, en el procediment ordinari número 276-2010, en relació amb els articles 22.1.a) i 2 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, i 23.1.a) i 2 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, per possible vulneració de l'article 33.3 de la CE, admesa a tràmit pel Tribunal Constitucional mitjançant la Providència de 6 de maig de 2014 (BOE núm. 116, de 13 de maig de 2014); i la qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4538-2013 plantejada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació número 5971/2010, en relació amb els articles 2, 6 i 8 de la Llei 7/1997, de 29 de maig, de l'Assemblea d'Extremadura, de mesures fiscals sobre producció i transport d'energia que incideixin sobre el medi ambient, en la redacció que els dona la Llei 8/2005, de 27 de desembre, de reforma de tributs propis de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, per possible vulneració dels articles 133.2, 156.1 i 157.3 de la Constitució, admesa a tràmit mitjançant la Providència de 6 de maig de 2014 (BOE núm. 116, de 13 de maig de 2014).

l'energia elèctrica, un conflicte positiu de competències per part del Govern de Catalunya⁵⁶.

Quant als projectes de llei en tràmit, el Projecte de llei de parcs nacionals⁵⁷ prossegueix la tramitació parlamentària; i han iniciat la tramitació el Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat⁵⁸ i el Projecte de llei per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials i la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures sobre fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres. Així mateix, al juliol de 2014 el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb representants de les comunitats autònomes ha abordat la modificació de la llei de patrimoni natural i de la biodiversitat, i ha debatut l'esborrany d'aquesta modificació legislativa durant l'organització de la Comissió Estatal de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, a Madrid.

Quant a les normes reglamentàries en tràmit, continua la tramitació el Projecte de reial decret pel qual s'aprova el Reglament de la llei de costes, que va presentar el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient al Consell Assessor de Medi Ambient i també es va obrir a consulta pública el passat mes de març, sobre el qual ja n'ha emès el dictamen el Consell d'Estat. També es troba en tramitació el Projecte de reial decret pel qual es modifica el Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, i s'ha presentat l'esborrany de Projecte d'ordre ministerial per la qual s'estableix la data a partir de la qual s'ha d'exigir la constitució de la garantia financera obligatòria per a les activitats de l'annex III de la

⁵⁶ Per la Providència de 27 de maig de 2014, el Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el conflicte positiu de competència núm. 2304-2014, promogut pel Govern de Catalunya contra els articles 8.4; 21; 22; 25, apartats 3, 4 i 5 (paràgrafs primer i segon) i 7; 26.3; 31; 32 i disposició final primera del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per calcular la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica (BOE núm. 132, de 31 de maig de 2014). *Vid.* el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 12/2014, de 20 de març, sobre el Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre (DOGC de 17 d'abril de 2014).

¹⁸ *Butlletí Oficial de les Corts Generals*, Congrés dels Diputats, X Legislatura, Sèrie A, núm. 78-1, de 31 de gener de 2014.

¹⁹ *Butlletí Oficial de les Corts Generals*, Congrés dels Diputats, X Legislatura, Sèrie A, núm. 92-1, de 25 d'abril de 2014.

Llei 26/2007, de 23 d'octubre. Pel que fa als residus, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha presentat al Consell Assessor de Medi Ambient el Projecte de reial decret per regular el trasllat de residus i la modificació del reial decret sobre restriccions d'utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics, perquè n'emeti l'informe. En l'àmbit de la protecció del medi marí, aquest ministeri ha sotmès a consulta pública la proposta de Programes de Seguiment de les Estratègies Marines, que pretenen englobar totes les actuacions encaminades a la presa de dades sobre l'estat ambiental del medi marí per a les cinc demarcacions marines espanyoles (nord-atlànica, sud-atlànica, de l'Estret i Alborán, llevantinobalear i canària). En el marc de la Comissió Estatal de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, també s'han debatut diverses propostes de modificació del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

En l'àmbit de la planificació, també cal destacar que el Govern, encara que amb gran retard, ja ha conclòs la planificació hidrològica de competència de l'Estat, que hauria d'haver estat tancada a finals de 2009, amb l'aprovació dels plans hidrològics de la part espanyola de la demarcació hidrogràfica del Tajo i de les demarcacions hidrogràfiques del Segura i del Xúquer (Reial decret 270/2014, d'11 d'abril; Reial decret 594/2014, d'11 de juliol i Reial decret 595/2014, d'11 de juliol). Paral·lelament a la conclusió del primer cicle de planificació hidrològica, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per fer complir la Directiva marc d'aigües, també ha iniciat el segon cicle de planificació, que conclou el 2015. D'altra banda, ha aprovat el Pla de Prevenció i Lluita contra els Incendis Forestals 2014, les mesures del qual impliquen uns quants ministeris (Presidència; Assumptes Exteriors i de Cooperació; Justícia; Defensa; Interior; Foment; Indústria, Energia i Turisme; Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i Economia i Competitivitat). Així mateix, en l'àmbit de la protecció del patrimoni natural i la biodiversitat, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla Sectorial de Turisme de Naturalesa i Biodiversitat, per integrar els objectius de conservació en la política de turisme i impulsar la posada en valor de la Xarxa Natura 2000, a la qual Espanya aporta un 27% del territori; i, a la Conferència Sectorial de Medi Ambient s'ha aprovat l'Estratègia espanyola per impulsar la conservació de la diversitat vegetal silvestre, que deriva del compromís d'Espanya amb "l'Estratègia mundial de conservació d'espècies vegetals", com a part del Conveni de Nacions Unides sobre diversitat biològica.

Finalment, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha presentat els avenços del Programa de Camins Naturals que du a terme aquest ministeri des del 1993, la finalitat del qual és crear i consolidar una xarxa d'itineraris naturals (la Xarxa de Camins Naturals) de longitud i tipologia variable, gràcies a la recuperació d'infraestructures existents, en desús o no. Actualment s'han construït un total de 109 camins, amb una longitud de més de 8.700 quilòmetres, i s'ha realitzat i s'ha enllaçat ja una part important dels de llarg recorregut. Per mitjà de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, aquest ministeri també ha publicat al web l'“Avanç de l'Avaluació de la Qualitat de l'Aire a Espanya 2013”, complint la normativa europea (Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, i la Directiva 2004/107/CE) i el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Durant el 2014 continua aplicable el Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016 “Pla AIRE”, aprovat pel Ministeri el 2013 i que inclou un conjunt de mesures, horitzontals i sectorials (entre altres, pel que fa al trànsit, indústria, construcció, ports i aeroports, agricultura i ramaderia), encaminades a millorar la qualitat de l'aire des d'una perspectiva nacional. Així mateix, en la Comissió Estatal de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat també s'ha revisat el Marc d'Acció Prioritària per a la Xarxa Natura 2000 a Espanya per al període de finançament 2014-2020, treball conjunt del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i les comunitats autònomes que recull les prioritats de conservació i les accions necessàries en la Xarxa Natura 2000 amb una definició millor dels objectius, de les necessitats, prioritats d'aquesta gestió i possibilitats de finançament, per a la seva pròxima remissió a la Comissió Europea.

1.1. La modificació de la Llei de responsabilitat mediambiental

al BOE la Llei 11/2014, de 3 de juliol, de modificació de la Llei 26/2007, de responsabilitat mediambiental⁵⁹. Aquesta modificació es realitza amb l'objectiu de

⁵⁹ D'acord amb la disposició final tercera, aquesta llei “té el caràcter de legislació bàsica de protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció de conformitat amb el que disposa l'article 149.1.23a de la Constitució espanyola, llevat dels apartats cinc al deu que constitueixen legislació bàsica d'assegurances dictada a l'empara de l'article 149.1.11a de la Constitució espanyola, i l'apartat 3 que té caràcter de legislació dictada a l'empara de les regles 18a, 23a i 24a de l'article [149.1 de la Constitució](#) espanyola. El termini establert en l'article 45.3 no té caràcter bàsic”.

“reforçar-ne els aspectes preventius, simplificar i millorar certs aspectes de l’aplicació”. Mitjançant aquesta llei s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol l’article 38 de la Directiva 2013/30/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de juny de 2013, sobre la seguretat de les operacions relatives al petroli i al gas mar endins, i que modifica la Directiva 2004/35/CE.

Aquesta llei ha introduït diverses modificacions en la Llei de responsabilitat mediambiental. En primer lloc, en modifica l’article 2.1.b) i amplia la definició dels danys a les aigües, que passen a incorporar els danys “en l’estat ecològic de les aigües marines, tal com defineix la Llei [41/2010, de 29 de](#) desembre, de protecció de medi marí, en la mesura que diversos aspectes de l’estat ecològic del medi marí no estiguin ja coberts pel Reial [decret legislatiu 1/2001, de 20 de](#) juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’aigües”. Aquesta precisió s’inclou a fi d’incorporar la modificació de la Directiva 2004/35/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, establerta en l’article 38 de la Directiva 2013/30/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de juny de 2013. Aquesta Directiva té com a objecte establir els requisits mínims destinats a prevenir accidents greus en les operacions relacionades amb el petroli i gas mar endins i a limitar les conseqüències d’aquests accidents i, per això, modifica la Directiva 2004/35/CE, a fi d’assegurar que la responsabilitat de l’operador s’apliqui a les aigües marines.

En segon lloc, introdueix algunes modificacions en l’aplicació de la Llei de responsabilitat mediambiental a les obres públiques d’interès general de l’Administració General de l’Estat. D’una banda, s’inclou un nou apartat en l’article 3, relatiu a l’àmbit d’aplicació de la llei, a fi de precisar-ne l’àmbit d’aplicació en el cas d’obres públiques d’interès general que siguin competència de l’Administració General de l’Estat. En aquest cas, la llei s’ha d’aplicar als danys causats a les espècies i als hàbitats protegits, a les aigües, al sòl i a la ribera del mar i de les rieres, i a les amenaces imminents dels danys que hi puguin ocórrer, quan hagin estat causats per les activitats econòmiques o professionals enumerades en l’annex III, encara que no hi hagi dol, culpa o negligència; i únicament als danys causats a les espècies i hàbitats naturals protegits si han estat causats per activitats professionals diferents de les enumerades en l’annex III i a qualsevol amenaça imminent de tals danys a causa d’alguna d’aqueixes activitats, sempre que hi hagi hagut culpa o negligència per part de l’operador. Es preveu que la normativa autonòmica en aquest aspecte pugui determinar l’aplicació d’aquest precepte

a les obres públiques d'especial rellevància i interès equivalents a les d'interès general de l'Estat, la titularitat i competència de les quals correspongui a les comunitats autònomes.

D'una D'altra banda, se suprimeix la disposició addicional desena de la Llei de responsabilitat mediambiental, que n'exceptua l'aplicació en les obres públiques d'interès general, si han seguit el procediment d'avaluació d'impacte ambiental i si han complert les prescripcions establertes en la declaració d'impacte ambiental. Aquest supòsit no estava previst en la llista d'excepcions de la Directiva 2004/35/CE i, atesa la possible incompatibilitat amb aquesta directiva, s'opta per suprimir-lo⁶⁰. Així mateix, perquè aquesta supressió no produeixi l'efecte no desitjat de control per les comunitats autònomes de les obres públiques estatals l'avaluació d'impacte ambiental de les quals ja està atribuïda a l'Administració estatal⁶¹, s'afegeix un apartat nou en l'article 7, que estableix la competència de l'Administració General de l'Estat per exigir l'adopció de les mesures de prevenció, evitació i reparació que procedeixin, quan es tracti d'obres públiques d'interès general de la seva competència. Si el dany o l'amenaça que el dany es produeixi afecten recursos naturals, la tutela del qual recaigui en les comunitats autònomes, és preceptiu demanar l'informe de l'òrgan autonòmic competent.

En tercer lloc, a fi de reforçar els aspectes preventius, es preveu que les autoritats competents adoptaran mesures per impulsar la realització voluntària d'anàlisi de riscos mediambientals, entre els operadors de qualsevol activitat susceptible d'ocasionar danys mediambientals, amb la finalitat d'assolir una gestió adequada del risc mediambiental de l'activitat (nou art. 17 bis).

En quart lloc, se simplifiquen certs aspectes de l'aplicació del règim de responsabilitat mediambiental, tant per als operadors econòmics com per a les administracions públiques, a fi de complir les mesures previstes en l'Informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) que, pel que fa a responsabilitat mediambiental, al·ludeix a la simplificació i reducció de càrregues administratives. Per

⁶⁰ El mateix preàmbul afirma que se suprimeix aquesta disposició addicional “amb l'objecte de millorar la transposició de la Directiva 2004/35/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals”.

⁶¹ LOZANO CUTANDA, B., POVEDA GÓMEZ, P., “Ley 11/2014, de 3 de julio, de modificación de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Mediambiental: análisis de sus novedades”, *Análisis Gómez Acebo&Pombo*, juliol 2014, p. 2.

assolir la dita simplificació, es modifiquen alguns aspectes relatius a les garanties financeres. A continuació, es destaquen les principals novetats:

- Fa falta Cal que l'obligació de disposar d'una garantia financera que els permeti fer front a la responsabilitat mediambiental inherent a l'activitat que pretenguin dur a terme s'apliqui únicament als operadors de les activitats incloses en l'annex III, sense perjudici de les exempcions previstes en l'article 28; per a la resta d'operadors és de caràcter voluntari. Amb això es pretén fomentar la utilització de les anàlisis de risc mediambiental com a eina de gestió del risc mediambiental (art. 24.1).
- Es trasllada de l'autoritat competent al mateix operador la determinació de la quantitat mínima que ha de quedar garantida, segons la intensitat i extensió del dany que l'activitat de l'operador pugui causar, de conformitat amb els criteris que s'estableixin reglamentàriament. Els operadors han de comunicar a l'autoritat competent la constitució de la garantia financera a la qual estiguin obligats. L'establiment de la quantia d'aquesta garantia parteix de l'anàlisi de riscos mediambientals de l'activitat, o de les taules de barems, que s'elaboren d'acord amb la metodologia que estableix el Govern reglamentàriament. L'autoritat competent estableix els corresponents sistemes de control que li permeten comprovar el compliment d'aquestes obligacions (art. 24.2 i 3). D'aquesta manera, segons el preàmbul, "s'agilitza el procediment per determinar la garantia financera, i l'operador està obligat a constituir una garantia financera, el qual en determina la quantia a partir de la realització de l'anàlisi de riscos mediambientals de la seva activitat, i és qui comunica a l'autoritat competent la constitució de la garantia".
- S'amplien els subjectes garantits per la garantia financera, de manera que, així mateix, poden figurar, com a subjectes garantits addicionals, els subcontractistes, els professionals que col·laboren amb l'operador en la realització de l'activitat autoritzada i la persona o entitat titular de les instal·lacions en què es dugui a terme l'activitat" (art. 27).
- Es determinen els criteris que han de servir de base per establir, per via reglamentària, les activitats exemptes de constituir garantia financera obligatòria. Concretament, en la seva nova redacció, l'apartat d) de l'article 28 estableix que tal exempció ha d'atenir-se "a l'escàs potencial de generar danys

mediambientals i un nivell d'accidentalitat baix". Amb aquesta previsió s'introdueix "un element de control de l'habilitació atorgada al Govern"⁶².

- Es modifica l'article 30 de la llei, per homogeneïtzar el contingut mínim de les pòlisses d'assegurances. El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, oïda la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, pot promulgar disposicions per les quals es reguli el contingut mínim i les limitacions admissibles, com ara sublímits, exclusions o franquícies a càrrec del titular de l'activitat, de manera que es conjuguen adequadament l'interès de les administracions públiques en què els titulars de les activitats sotmeses a l'obligació compten amb suficient cobertura per a tots els aspectes possibles de la seva responsabilitat mediambiental, amb l'oferta de garanties disponible en cada moment en els mercats financers.
- Es modifica l'article 31.1 de la llei, que fa referència a la vigència de la garantia financera obligatòria, per precisar que la garantia ha d'estar vigent durant tot el període d'activitat, a partir de la data en què la seva constitució sigui obligatòria i fins al cessament efectiu.

En cinquè lloc, es modifica l'article 33, sobre el Fons de Compensació de Danys Mediambientals del Consorci de Compensació d'Assegurances, per adaptar-ne la regulació a la situació actual de la normativa nacional d'acord amb la qual està constituït, ja que actualment opera un sistema de liquidació d'entitats asseguradores en situació d'insolvència, gestionat pel Consorci de Compensació d'Assegurances, que, de facto, suposa un mecanisme de garantia per als assegurats de tots els rams del segur i que també operaria en relació amb la cobertura de responsabilitat mediambiental. Per això, se suprimeix l'adscripció d'aquest fons als supòsits d'insolvència de les entitats asseguradores de la pòlissa de garantia obligatòria i es manté per a prolongar l'extensió de l'assegurança per als danys ocorreguts durant la vigència de la pòlissa però amb manifestació diferida.

Finalment, es modifiquen alguns aspectes del capítol VI sobre normes aplicables als procediments d'exigència de responsabilitat mediambiental, amb l'objectiu de millorar-ne la tramitació. En aquesta línia, es modifica l'article 41 per precisar els tràmits

⁶² LOZANO CUTANDA, B., POVEDA GÓMEZ, P., "Ley 11/2014...", *op. cit.*, p. 2.

d'iniciació en el procediment d'exigència de responsabilitat mediambiental. Així mateix, es modifica el termini establert en l'article 45.3 per resoldre els procediments d'exigència de responsabilitat mediambiental, que passa a ser de sis mesos, ampliable a tres mesos més en casos científica i tècnicament complexos. Transcorregut aquest termini, a efectes exclusivament de garantir el dret de les persones interessades a la tutela administrativa i judicial, s'entén caducat el procediment iniciat d'ofici, sense perjudici de l'obligació inexcusable de l'autoritat competent de resoldre. No obstant això, la llei ha suprimit la referència a la desestimació per silenci de l'iniciat a instància de part, per la qual cosa, en aplicació de l'article 43.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, cal entendre'l estimatori⁶³.

D'altra banda, la Llei 11/2014, objecte d'anàlisi, també modifica la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (s'incorpora un nou paràgraf a l'apartat 1 de la disposició derogatòria única⁶⁴) i la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional (se n'amplia l'annex III amb noves actuacions d'interès general).

1.2. Algunes normes amb rang de llei no ambientals, d'interès des del punt de vista ambiental

Encara que no es tracta de lleis amb l'objecte de les quals sigui la protecció del medi ambient, ens referirem breument a alguns aspectes del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres

⁶³ Així ho adverteixen LOZANO CUTANDA, B., POVEDA GÓMEZ, P., "Ley 11/2014...", *op. cit.*, p. 3, que assenyalen que el silenci en aquests casos s'ha d'entendre estimatori "al menos de la concurrencia de un supuesto de responsabilidad, pues difícilmente pueden «estimarse» por silencio medidas de prevención o de reparación medioambiental".

⁶⁴ La redacció del nou apartat que s'incorpora és la següent: "Sense perjudici d'això, la regulació que contenen els articles 4, 11, 15 i 20 sobre emplaçaments i distàncies que s'estableix en el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses no és aplicable a les instal·lacions de tractament d'aigües, instal·lacions de depuració d'aigües residuals, instal·lacions dessalobrades i dessalinitzadores, sempre que aquesta qüestió hagi estat objecte d'anàlisi i correcció, si s'escau, mitjançant les mesures procedents d'acord amb les millors tècniques disponibles o que s'ajustin al que a aquest respecte determini l'avaluació ambiental o, si s'escau, l'autorització ambiental integrada corresponent o el títol administratiu equivalent".

mesures de reforma administrativa; i de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.

A. L'adopció de mesures relacionades amb l'eficiència energètica: el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

El Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència⁶⁵, s'emmarca en el Pla de Mesures per al Creixement, la Competitivitat i l'Eficiència, aprovat pel Consell de Ministres el 6 de juny de 2014, que preveu un paquet de mesures respectuoses amb l'objectiu de sanejament fiscal, que impulsen el creixement i la competitivitat present i futura de l'economia i el finançament empresarial. Amb aquest reial decret llei s'adopten les mesures legislatives de caràcter urgent necessàries per executar el dit pla, a més d'altres mesures. Totes estan dirigides a augmentar la competitivitat i fomentar el funcionament eficient dels mercats i millorar el finançament, i també a millorar l'ocupabilitat. Els eixos fonamentals d'aquest reial decret llei són tres: fomentar la competitivitat i el funcionament eficient dels mercats; millorar l'accés al finançament, i fomentar l'ocupabilitat i l'ocupació.

Des de la perspectiva que ací ens interessa, destaquem la inclusió, en aquest reial decret llei, d'un títol, el III (art. de 57 a 86)⁶⁶, en el qual s'inclouen mesures urgents en l'àmbit energètic, "dirigides a garantir la sostenibilitat i accessibilitat en els mercats d'hidrocarburs, i a establir un sistema d'eficiència energètica en línia amb les directrius europees"⁶⁷. En efecte, en aquest títol, integrat per quatre capítols, s'inclouen mesures relatives als gasos líquids del petroli (capítol I —art. 57 i 58—), a la sostenibilitat

⁶⁵ Actualment aquest Reial decret llei s'està tramitant al Congrés dels Diputats com a Projecte de llei d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (procedent del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol). *Butlletí Oficial de les Corts Generals*, Congrés dels Diputats, X Legislatura, Sèrie A, núm. 103-1, de 16 de juliol de 2014.

⁶⁶ Aquest títol es dicta a l'empara dels articles 149.1.13 i 25 de la Constitució, que atribueixen a l'Estat la competència exclusiva sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i bases del règim energètic i miner, respectivament.

⁶⁷ Apartat VII del preàmbul.

econòmica del sistema de gas natural (capítol II —art. del 59 al 66—), al sector d'hidrocarburs i mines (capítol III —art. 67 i 68—) i a l'eficiència energètica (capítol IV —art. del 69 al 86—). En el marc d'aquesta crònica, destaquem especialment les mesures que s'adopten pel que fa a eficiència energètica i que suposen la incorporació parcial al dret espanyol de la Directiva 2012/27/UE del Parlament europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen la Directiva 2009/125/CE i la Directiva 2010/30/UE, i per la qual es deroguen la Directiva 2004/8/CE i la Directiva 2006/32/CE, i que crea un marc comú per fomentar l'eficiència energètica dins de la Unió i estableix accions concretes a fi de materialitzar el considerable potencial d'estalvi d'energia no realitzat.

Entre les mesures sobre eficiència energètica que s'hi inclouen, cal esmentar, en primer lloc, la creació d'un sistema nacional d'obligacions d'eficiència energètica, en virtut del qual s'assigna a les empreses comercialitzadores de gas i electricitat, als operadors de productes petrolífers a l'engròs, i als operadors de gasos líquids de petroli a l'engròs, una quota anual d'estalvi energètic d'àmbit nacional, denominada obligacions d'estalvi. El període de duració d'aquest sistema nacional d'obligacions d'eficiència energètica comprèn des de la entrada en vigor d'aquest reial decret llei fins al 31 de desembre de 2020. Arran de l'establiment d'aquest sistema, l'objectiu d'estalvi anual, els percentatges de repartiment entre els corresponents subjectes obligats, i les quotes o obligacions d'estalvi resultants i la seva equivalència financera, han de ser fixats anualment per l'ordre del ministre d'Indústria, Energia i Turisme. L'objectiu d'estalvi energètic anual que es determini s'ha de repartir entre els subjectes obligats proporcionalment, en el cas de les comercialitzadores de gas i electricitat, al volum de les seves vendes d'energia final en l'àmbit nacional a consumidors finals, i en el cas dels operadors a l'engròs de productes petrolífers i gasos líquids del petroli, al volum de les seves vendes d'energia final en l'àmbit nacional per a la seva posterior distribució al detall, expressades en GWh, durant el segon any anterior al període anual de l'obligació.

En segon lloc, per fer efectiu el compliment de les obligacions anuals d'estalvi energètic, preveu que els subjectes obligats hagin de fer una contribució financera anual que han d'ingressar terceres parts, per l'import resultant de multiplicar la seva obligació d'estalvi anual per l'equivalència financera que s'estableixi, al Fons Nacional d'Eficiència Energètica, a la qual ens referirem posteriorment. Alternativament, i en els termes que reglamentàriament fixi el Govern, preveu que es pugui establir un

mecanisme d'acreditació de la consecució d'una quantitat d'estalvi energètic equivalent al compliment de les obligacions del sistema. Aquest mecanisme s'ha de basar en la presentació de certificats d'estalvi energètic (CAU) negociables, que resultin de la realització de les actuacions d'eficiència energètica que es defineixin en un catàleg i que compleixin els requisits i les condicions que s'estableixin en el dit catàleg, la gestió del qual correspon a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. Per obtenir i transmetre certificats d'estalvi energètic s'ha d'estar acreditat davant del sistema d'obligacions d'eficiència energètica en les condicions que es determinin reglamentàriament. Els subjectes que s'acreditin han de subscriure un assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia financera que cobreixi els riscos que puguin derivar-se de les seves actuacions en la quantia mínima que s'estableixi mitjançant un reial decret. Així mateix, aquest mecanisme comprèn un sistema de control que inclou la verificació material d'una part estadísticament significativa de les mesures de millora de l'eficiència energètica certificades.

En tercer lloc, es crea el Fons Nacional d'Eficiència Energètica, sense personalitat jurídica, la finalitat del qual és finançar les iniciatives nacionals d'eficiència energètica, en compliment de l'article 20 de la Directiva 2012/27/UE, del Parlament europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012. Aquest Fons, adscrit al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per mitjà de la Secretaria d'Estat d'Energia, es dedica al finançament de mecanismes de suport econòmic, financer, assistència tècnica, formació, informació, o altres mesures, a fi d'augmentar l'eficiència energètica en diferents sectors, de manera que contribueixin a assolir l'objectiu d'estalvi energètic nacional que estableix el Sistema Nacional d'Obligacions d'Eficiència energètica previst en l'article 7 de l'esmentada Directiva. També poden atendre's amb càrrec a les dotacions d'aquest Fons les despeses d'administració que n'ocasioni la gestió. El Fons Nacional d'Eficiència Energètica està dotat amb els recursos provinents de fons estructurals comunitaris FEDER; les aportacions dels subjectes obligats pel sistema nacional d'obligacions d'eficiència energètica en concepte de compliment o liquidació de les seves obligacions d'estalvi; altres aportacions que es consignin en els Pressupostos Generals de l'Estat; i qualsevol altre recurs destinat a finançar actuacions que tinguin com a objectiu implementar mesures d'estalvi i eficiència energètica. La gestió s'assigna a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, i la supervisió i el control corresponen al

Comitè de Seguiment i Control adscrit al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per mitjà de la Secretaria d'Estat d'Energia.

En quart lloc, obliga els proveïdors de serveis energètics a subscriure un assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia financera que cobreixi els riscos que puguin derivar-se de les actuacions, tenint en compte que poden gestionar actuacions d'un cert risc com, entre altres, l'execució i la gestió de projectes d'estalvi i eficiència energètica en el sector industrial i el sector de l'edificació.

Finalment, inclou un règim d'infraccions i sancions pel que fa a eficiència energètica, i tipifica una sèrie d'infraccions i sancions en l'àmbit del sistema nacional d'obligacions d'eficiència energètica i pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics, promoció de l'eficiència del subministrament d'energia i comptabilització de consums energètics. La instrucció dels procediments sancionadors derivats de les infraccions administratives tipificades en l'àmbit del sistema nacional d'obligacions d'eficiència energètica i l'arxiu, després de la seva resolució, de les actuacions realitzades, correspon a l'òrgan de la direcció general corresponent de la Secretaria d'Estat d'Energia. Per la seva banda, la competència per a la imposició de les sancions corresponents a les infraccions en l'àmbit del sistema nacional d'obligacions d'eficiència energètica correspon: al Consell de Ministres per a la imposició de sancions per la comissió d'infraccions molt greus; al ministre d'Indústria, Energia i Turisme per a la imposició de sancions per la comissió d'infraccions greus, i al secretari d'Estat d'Energia per a la imposició de sancions lleus. En canvi, pel que fa a les auditories energètiques, l'acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics, la promoció de l'eficiència del subministrament d'energia i la comptabilització de consums energètics, la instrucció i resolució dels expedient sancionadors que s'incoen correspon als òrgans competents de les comunitats autònomes.

També des de la perspectiva de l'eficiència energètica, cal esmentar la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. Mitjançant la disposició addicional tretzena d'aquesta llei s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol l'article 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica. D'aquesta manera, s'estableixen els principis i requisits d'eficiència energètica per a l'adquisició de béns, serveis i edificis per les administracions públiques integrades en el sector públic estatal. Les administracions públiques a les quals es refereix l'apartat 2 de

l'article 3 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que pertanyin al sector públic estatal, només poden adquirir béns, serveis i edificis que tinguin un alt rendiment energètic, en la mesura que això sigui coherent amb la rendibilitat, la viabilitat econòmica, la sostenibilitat en un sentit més ampli, la idoneïtat tècnica, i una competència suficient, segons el que indica l'annex d'aquesta llei. Aquesta obligació és aplicable als contractes de subministrament, de serveis i d'obres el resultat de les quals sigui la construcció d'un edifici, sempre que aquests contractes siguin d'un valor estimat igual o superior als llindars dels contractes que determinen la subjecció a una regulació harmonitzada establerts en els articles 14, 15 i 16 del Text refós de la llei de contractes del sector públic. Igualment, és aplicable a l'adquisició o arrendament d'edificis⁶⁸. Així mateix, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha d'impulsar actuacions encaminades a aconseguir que per diferents entitats del sector públic autonòmic i local s'adquireixin béns, serveis i edificis amb alt rendiment energètic. Igualment, els ministeris d'Indústria, Energia i Turisme, i d'Hisenda i Administracions Públiques han de dur a terme les actuacions necessàries per facilitar que els òrgans de contractació, en les licitacions per a contractes de serveis amb un component energètic important, puguin avaluar la possibilitat de subscriure contractes de rendiment energètic a llarg termini que permetin valorar l'estalvi energètic computat en el període total de duració del contracte. A aquests efectes han de facilitar als òrgans de contractació mitjançant la publicació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, eines metodològiques per realitzar l'avaluació i també models de contracte i clàusules administratives de contingut jurídic que continguin els plecs que regeixin la licitació d'aquesta mena de contractes.

B. La Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions

⁶⁸ D'acord amb la disposició transitòria sisena de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, que estableix el règim transitori de l'aplicació de mesures d'eficiència energètica, "El que preveu la disposició addicional tretzena és aplicable als expedients de contractació i d'adquisicions i arrendament d'immobles que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor de la present llei. A aquests efectes, s'entén com a data d'iniciació de l'expedient la publicació de la corresponent convocatòria per a l'adjudicació del contracte o en absència de convocatòria la d'aprovació dels corresponents plecs o documents equivalents".

La Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions, estableix un marc regulador nou pel que fa a aquesta qüestió. Aquesta llei es dicta en exercici de la competència exclusiva de l'Estat pel que fa a telecomunicacions —prevista en l'art. 149.1.21 CE—, si bé les disposicions dirigides a garantir la unitat de mercat en el sector de les telecomunicacions es dicten a l'empara de l'article 149.1.1 CE, sobre regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals i de l'article 149.1.13 CE, sobre bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica. Per tant, no estem davant d'una llei d'estil ambiental, sinó davant d'una llei que regula l'explotació de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques en règim de lliure competència; les obligacions de servei públic i els drets i obligacions de caràcter públic en l'explotació de xarxes i en la prestació de serveis de comunicacions electròniques; l'avaluació de la conformitat d'equips i aparells; el domini públic radioelèctric; l'administració de les telecomunicacions; les taxes en aquest àmbit, i la inspecció i el règim sancionador.

No obstant això, portem a col·lació aquesta llei, fins i tot sense entrar a analitzar-ne íntegrament el contingut, per destacar algunes novetats d'interès en relació amb els instruments de planificació urbanística i el règim d'intervenció administrativa en aquesta matèria. En primer lloc, un aspecte especialment conflictiu de la llei des del punt de vista competencial és l'exigència d'un informe preceptiu i vinculant al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme en els procediments d'aprovació, modificació o revisió dels instruments de planificació territorial o urbanística que afecten el desplegament de les xarxes públiques de comunicacions electròniques (art. 35.2). Aquest informe, que s'ha d'emetre en un termini màxim de tres mesos, ha de versar sobre l'adequació dels dits instruments de planificació amb Llei de telecomunicacions i amb la normativa sectorial de telecomunicacions i sobre les necessitats de xarxes públiques de comunicacions electròniques en l'àmbit territorial al qual es refereixin. Transcorregut aquest termini, sense perjudici del que disposa l'article [83.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre](#), l'informe s'entén emès amb caràcter favorable i es pot continuar amb la tramitació de l'instrument de planificació. Sense la sol·licitud d'aquest informe, no es pot aprovar el corresponent instrument de planificació territorial o urbanística pel que fa a l'exercici de les competències estatals sobre telecomunicacions. En el cas que l'informe no sigui favorable, els òrgans encarregats de la tramitació dels procediments

d'aprovació, modificació o revisió dels instruments de planificació territorial o urbanística, disposen d'un termini màxim d'un mes, a comptar de la recepció de l'informe, per remetre al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme les seves al·legacions a l'informe, motivades per raons de medi ambient, salut pública, seguretat pública o ordenació urbana i territorial. El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a la vista de les al·legacions presentades, ha d'emetre un nou informe en el termini màxim d'un mes a comptar de la recepció de les al·legacions. Sense perjudici del que disposa l'article [83.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre](#), transcorregut el termini, l'informe s'entendrà emès amb caràcter favorable i podrà continuar-se amb la tramitació de l'instrument de planificació. L'informe té caràcter vinculant, de manera que si l'informe torna a ser no favorable, no podrà aprovar-se el corresponent instrument de planificació territorial o urbanística pel que fa a l'exercici de les competències estatals sobre telecomunicacions.

En segon lloc, pel que fa als mecanismes d'intervenció administrativa en aquest àmbit, la Llei de telecomunicacions manté la supressió de llicència o autorització prèvia per a les estacions o instal·lacions radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic, que conté la disposició addicional tercera de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. Aquesta supressió també és aplicable a la instal·lació de xarxes públiques de comunicacions electròniques o d'estacions radioelèctriques en domini privat diferents de les anteriors, a les quals les administracions públiques competents no poden exigir l'obtenció de llicència o l'autorització prèvia d'instal·lacions, de funcionament o d'activitat, o de caràcter mediambiental, ni altres llicències o aprovacions de caràcter semblant o anàlogues que subjectin aquesta instal·lació a l'autorització prèvia, en el cas que l'operador hagi presentat a l'Administració pública competent per a l'atorgament de la llicència o autorització un pla de desplegament o instal·lació de xarxa de comunicacions electròniques, en el qual s'incloguin aquestes infraestructures o estacions, i sempre que aquest pla hagi estat aprovat per aquesta administració. En aquests casos, les llicències o autoritzacions són substituïdes per declaracions responsables, de conformitat amb el que estableix l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. La declaració responsable ha de contenir una manifestació explícita del compliment dels requisits que resultin exigibles d'acord amb la normativa vigent, fins i tot, si és el cas, estar en possessió de la documentació que així ho acrediti. En tot cas, la persona declarant ha

d'estar en possessió del justificant de pagament del tribut corresponent quan sigui preceptiu. La presentació de la declaració responsable, amb el consegüent efecte d'habilitació a partir d'aquest moment per executar la instal·lació, no ha de perjudicar de cap manera la situació i l'acomodament efectiu de les condicions de la infraestructura o estació radioelèctrica a la normativa aplicable, ni ha de limitar l'exercici de les potestats administratives de comprovació, inspecció, sanció, i, en general, de control que a l'Administració en qualsevol ordre, estatal, autonòmic o local, li estiguin atribuïdes per l'ordenament sectorial aplicable en cada cas. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi una declaració responsable o que la incorpori, o la no-presentació de la declaració responsable determina la impossibilitat d'explotar la instal·lació i, si és el cas, l'obligació de retirar-la des del moment que es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives (art. 34.6).

D'altra banda, la llei exclou qualsevol tipus de concessió, autorització o llicència nova o modificació de l'existent o declaració responsable o comunicació prèvia per raons d'ordenació del territori, urbanisme o mediambientals, per a la realització, sobre una infraestructura de xarxa pública de comunicacions electròniques, fixa o mòbil, ja ubicada en domini públic o privat, d'actuacions d'innovació tecnològica o adaptació tècnica que suposen la incorporació de nou equipament o la realització d'emissions radioelèctriques en noves bandes de freqüències o amb altres tecnologies, sense variar els elements d'obra civil i pal.

1.3. Novetats en àmbits sectorials diversos

A. Patrimoni natural i biodiversitat

Mitjançant el Reial decret 416/2014, de 6 de juny, s'ha aprovat, en aplicació de l'article 14 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, el Pla Sectorial de Turisme de Naturalesa i Biodiversitat 2014-2020, amb una vigència de sis anys a partir de la seva entrada en vigor, i se n'ha prorrogat l'aplicació fins que no s'aprovi un altre pla que el substitueixi.

Aquest Pla té com a objecte "l'impuls i la promoció del turisme de naturalesa a Espanya, com a activitat econòmica generadora d'ingressos i ocupació, que posi en valor la biodiversitat, i asseguri la correcta conservació dels valors naturals del territori i

contribueixi a la seva utilització sostenible”. La meta principal és potenciar un turisme de naturalesa sostenible generador d’ingressos i ocupació, que integri la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat en totes les anelles de la cadena turística, de manera que es reduïxin els impactes negatius i augmentin els efectes positius, amb la creació d’un producte a l’altura de la rellevància del patrimoni natural d’Espanya, que a més contribueixi a conservar-lo.

Amb aquest fi, estableix un marc de planificació general per impulsar un turisme de naturalesa sostenible a Espanya i defineix quatre objectius concrets. L’objectiu 1 busca la configuració d’un producte turístic sostenible que es caracteritzi perquè es pugui dur a terme en llocs de la Xarxa Natura 2000 (a Espanya, més del 27% del territori) i altres espais aptes per a aquesta mena de turisme on es realitzi una gestió planificada i activa del turisme; perquè hi hagi compromís del gestor de l’espai per fomentar un turisme de naturalesa sostenible, i perquè hi hagi compromís voluntari de les empreses turístiques i altres actors de l’entorn amb la conservació dels valors naturals de l’espai i amb la millora de la sostenibilitat de les seves activitats, col·laborant amb l’òrgan gestor. L’objectiu 2 se centra en la promoció del turisme de naturalesa sostenible a Espanya, que ha de focalitzar-se en els espais reconeguts pel seu especial compromís amb la sostenibilitat del turisme de naturalesa en la seva gestió i en les activitats empresarials. L’objectiu 3 pretén implicar tots els interessats per establir i consolidar vincles que condueixin a una consideració millor de la biodiversitat. I l’objectiu 4 busca millorar els coneixements, la informació i la formació relacionats amb el turisme de naturalesa, a fi de poder conèixer l’estat i l’evolució del turisme de naturalesa a Espanya, el seu impacte sobre la biodiversitat, la societat i l’economia i afavorir l’avanç cap als objectius del Pla Sectorial.

El Pla també inclou un conjunt d’accions associades a aquests objectius que han de contribuir al seu èxit. Les seves característiques essencials són la concertació d’interessos de tots els sectors públics i privats implicats en la conservació de la biodiversitat i el turisme de naturalesa, i també la coordinació que n’optimitzi la posada en marxa.

B. Protecció del medi marí

En l'àmbit de la protecció del medi marí, cal destacar, en primer lloc, l'aprovació, per mitjà de l'Ordre AAA/702/2014, de 28 d'abril⁶⁹, del Pla Estatal de Protecció de la Ribera del Mar contra la Contaminació, que forma part del Sistema Nacional de Resposta davant de la Contaminació Marina Accidental, aprovat mitjançant el Reial decret 1695/2012, de 21 de desembre, i que complementa els plans territorials establerts amb les comunitats autònomes, amb l'objectiu d'assegurar la coordinació en les actuacions de lluita contra la contaminació en la costa. Aquest Pla és aplicable als casos de contaminació marina accidental o deliberada, sigui quin sigui l'origen o naturalesa, que afecti o pugui afectar la costa, tal com queda definida en l'article 2.b) del Reial decret 1695/2012, i que requereixi la intervenció de l'Administració General de l'Estat, atenent als criteris d'activació establerts en el Sistema Nacional de Resposta. En tot cas, es pot activar a petició d'una comunitat autònoma quan concórreguen circumstàncies que així ho requereixin.

En segon lloc, mitjançant l'Ordre AAA/705/2014, de 28 d'abril, es creen els cinc comitès de seguiment de les estratègies marines —un per a cada demarcació marina espanyola—, previstos en la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, per facilitar la coordinació entre les administracions estatal i autonòmiques; i es regulen la seva composició, funcions i règim de funcionament.

En tercer lloc, també s'han aprovat l'Ordre AAA/1260/2014, de 9 de juliol, per la qual es declaren zones d'especial protecció per a les aus en aigües marines espanyoles; l'Ordre AAA/1299/2014, de 9 de juliol, per la qual s'aprova la proposta d'inclusió en la llista de llocs d'importància comunitària de la Xarxa Natural 2000 dels espais marins ESZZ16001 Sistema de canons submarins occidentals del golf de Lleó, ESZZ16002 Canal de Menorca, ESZZ12002 Volcans de fang del golf de Cadis i ESZZ12001 Banc de Galícia; i l'Ordre AAA/1493/2014, de 28 de juliol, per la qual es modifiquen l'Ordre de 4 d'abril de 1986, per la qual s'estableix una reserva marina a l'illa de Tabarca, l'Ordre ARM/3841/2008, de 23 de desembre, per la qual es regula la reserva marina d'interès pesquer de les Illes Columbretes, l'Ordre ARM/2094/2010, de 21 de juliol, per

⁶⁹ Aquesta ordre es dicta d'acord amb l'article 149.1.23a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat competències per dictar legislació bàsica del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció del medi ambient al seu territori (*vid. disposició final primera*).

la qual es regula la reserva marina de l'illa de La Palma i l'Ordre ARM/1744/2011, de 15 de juny, per la qual es regula la reserva marina del Cabo de Gata-Níjar.

C. Aigües

Pel que fa a les aigües, destaca, d'una banda, l'aprovació dels últims plans hidrològics de competència de l'Estat, per fer complir la Directiva marc de l'aigua. Ens referim al Reial decret 270/2014, d'11 d'abril; al Reial decret 594/2014, d'11 de juliol, i Reial decret 595/2014, d'11 de juliol, mitjançant els quals s'aproven, respectivament, els plans hidrològics de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del Tajo, de la Demarcació Hidrogràfica del Segura i de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.

D'una D'altra banda, l'aprovació del Reial decret 773/2014, de 12 de setembre, pel qual s'aproven diverses normes reguladores del transvasament per l'aqüeducte Tajo-Segura⁷⁰. S'hi estableixen les regles d'explotació d'aquest transvasament, els mecanismes de predicció d'aportacions mensuals, els valors mensuals dels consums de referència de les aigües transvasades per usos i zones de reg, els desembassaments màxims de referència i les característiques i periodicitat dels informes de seguiment, i s'hi assegura el no-increment de la despesa pública i el respecte a les assignacions, reserves i cabals ecològics que estableix el Pla Hidrològic del Tajo. Així mateix, per mitjà de la disposició final primera, modifica el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica. Concretament, modifica l'apartat 1 de l'article 69 perquè en la redacció del Pla Hidrològic Nacional es prevegin i s'hi especifiquin les transferències de recursos entre diferents demarcacions hidrogràfiques, amb les condicions a què han d'ajustar-se; i s'incorpori al contingut un catàleg dels transvasaments existents a Espanya, que almenys s'ha d'estendre a tots els que no puguin ser considerats de poca quantia, i s'especifiquen les característiques funcionals de cadascun i la norma jurídica que els habilita.

⁷⁰ Aquest reial decret es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.22a CE, que atribueix a l'Estat la competència sobre la legislació, l'ordenació i la concessió de recursos i aprofitaments hidràulics si les aigües recorren per més d'una comunitat autònoma. No obstant això, la disposició final primera té caràcter bàsic i es dicta a l'empara de l'article 149.1.13a CE, que reserva a l'Estat la competència sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica (disposició final segona).

D. Protecció de l'atmosfera

En matèria de Pel que fa a la protecció de l'atmosfera, cal esmentar el Reial Decret 678/2014, d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Concretament, modifica la disposició transitòria única del Reial decret 102/2011 i suprimeix per al sulfur de carboni l'exigència del compliment de la concentració mitjana en trenta minuts. D'altra banda, manté la concentració mitjana en 24 hores, que no ha de superar-se, encara que es modifica el valor fixat, i ara s'estableix el de 70 micrograms per metre cúbic com a objectiu de qualitat mitjà en 24 hores per a la protecció de la salut —seguint el que preveu la Directiva 2009/161/UE de la Comissió, de 17 de desembre de 2009, per la qual s'estableix una tercera llista de valors límit d'exposició professional indicatius en aplicació de la Directiva 98/24/CE del Consell, de 7 d'abril de 1998, i per la qual es modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comissió, de 8 de juny de 2000.

E. Energies renovables

En aquests últims mesos, dins del procés de reforma del sector elèctric iniciat pel Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric, i que ha continuat amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, s'han aprovat diverses normes reglamentàries d'interès en relació amb les fonts d'energia renovables.

Mitjançant l'aprovació del Reial Decret 413/2014, de 6 de juny⁷¹, el Consell de Ministres avança en el transcurs del mandat al Govern contingut en les dues normes amb rang de llei esmentades i regula el nou règim jurídic i econòmic de l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, que ha suscitat una gran polèmica en el sector. Aquesta norma s'estructura en cinc títols, en els quals, a més d'incloure una sèrie de disposicions generals (títol I), es

⁷¹ Aquest reial decret es dicta a l'empara del que estableix l'article 149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva per determinar les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic. Així mateix, el que disposen els capítols I i II del títol V es dicta a l'empara de l'article 149.1.22a de la Constitució espanyola que atribueix a l'Estat la competència sobre l'autorització de les instal·lacions elèctriques si el seu aprofitament afecta una altra comunitat (disposició final primera).

regulen els drets i les obligacions de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus (títol II); la participació en el mercat elèctric (títol III); el règim retributiu específic d'aquestes instal·lacions (títol IV); els procediments i registres administratius (títol V), i la representació (títol VI)⁷².

Aquest reial decret estableix un nou sistema de retribució per a les instal·lacions productores d'energia elèctrica a partir de fonts renovables, de cogeneració i de residus, que substitueix l'anterior sistema de primes. Atesa la impossibilitat de realitzar un estudi complet d'aquesta norma, d'una gran complexitat tècnica, en el marc d'aquesta crònica, ens limitem a destacar dos aspectes. En relació amb l'àmbit d'aplicació, s'inclouen totes les instal·lacions a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus [pertanyents a la categoria *a*): productors que utilitzin la cogeneració o altres formes de producció d'electricitat a partir d'energies residuals; categoria *b*): Instal·lacions que utilitzin com a energia primària alguna de les energies renovables no fòssils; o categoria *c*): instal·lacions que utilitzin com a energia primària residus amb valoració energètica no previstos en la categoria *b*), instal·lacions que utilitzin combustibles dels grups b.6, b.7 i b.8 quan no compleixin els límits de consum establerts per als esmentats subgrups i instal·lacions que utilitzin licors negres], i ja no hi ha l'anterior separació entre règim ordinari i règim especial, conceptes eliminats per la Llei 24/2013, de 26 de desembre. No obstant això, el règim retributiu específic regulat en aquesta norma, només és aplicable a determinades instal·lacions incloses en el seu àmbit d'aplicació, que han de complir requisits addicionals i estar subjectes a altres procediments relacionats amb l'atorgament del dit règim.

Quant al sistema de retribució, aquest reial decret regula el règim retributiu específic per fomentar la producció d'energia a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració d'alta eficiència i residus i que pot ser percebut per les instal·lacions addicionalment a la retribució que els correspongui per la seva participació en el mercat de producció d'energia elèctrica per mitjà de qualsevol de les seves modalitats de contractació.

⁷² Per a una anàlisi de les principals modificacions que suposa aquest reial decret, *vid.* MENDOZA LOSANA, A. I., "Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Un nuevo y conflictivo paso en la reforma del sector eléctrico español", a *Análisis Gómez-Acebo&Pombo*, juny 2014 (disponible en l'enllaç següent: <<http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/real-decreto-413-2014-de-6-de-junio-por-el-que-se-regula-la-actividad-de-produccion-de-energia-electrica-a-partir-de-fuentes-de-energia-renovables-cogeneracion-y-residuos.pdf>> —últim accés, 15 d'octubre de 2014—).

Aquest règim és aplicable a les instal·lacions de producció a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració d'alta eficiència i residus que no assoleixin el nivell mínim necessari per cobrir els costos que els permetin competir en nivell d'igualtat amb la resta de tecnologies en el mercat i obtenir una rendibilitat raonable, referida a la instal·lació tipus que en cada cas sigui aplicable. La novetat principal radica que s'abandona la retribució purament variable utilitzada fins a la data (primes i tarifes regulades) per un esquema que reflecteixi més fidelment l'estructura real de costos de l'activitat, en què alguns són fixos i altres purament variables. Aquest nou règim retributiu és aplicable tant a les instal·lacions noves com a les existents. Per a les noves, l'atorgament s'estableix mitjançant procediments de concurrència competitiva que s'ajusten als principis de transparència, objectivitat i no-discriminació. Les ja existents que tenen reconegut un règim econòmic primat també han de percebre aquest nou règim retributiu específic. Excepcionalment, el règim retributiu específic pot incorporar, a més, un incentiu a la inversió quan la seva instal·lació suposi una reducció significativa dels costos en els sistemes dels territoris no peninsulars. Aquest incentiu s'estableix en funció de la reducció dels costos que generi i no tant de les característiques de la instal·lació tipus, i millora la rendibilitat de les instal·lacions que tinguin atorgat aquest incentiu.

Com a complement del Reial decret 413/2014, s'han aprovat l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, amb la qual, segons afirma el preàmbul, "es completa el canvi de model de retribució de les energies renovables, de cogeneració i residus i es dóna estabilitat financera al sistema amb caràcter definitiu, alhora que es garanteix una rendibilitat raonable a les instal·lacions"; l'Ordre IET/1168/2014, de 3 de juliol, per la qual es determina la data d'inscripció automàtica de determinades instal·lacions en el registre de règim retributiu específic previst en el títol V del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus; i l'Ordre IET/1459/2014, d'1 d'agost, per la qual s'aproven els paràmetres retributius i s'estableix el mecanisme d'assignació del règim retributiu específic per a noves instal·lacions eòliques i fotovoltaïques en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars. Tant el Reial decret 413/2014 com

L'Ordre IET/1045/2014 han estat recorreguts davant del Tribunal Suprem per l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables (APPA).

F. La nova regulació per al Consell Nacional del Clima

En l'àmbit organitzatiu, per mitjà del Reial decret 415/2014, de 6 de juny, que deroga el Reial decret 1188/2001, de 2 de novembre, s'estableix una regulació nova de la composició i les funcions del Consell Nacional del Clima —òrgan col·legiat interministerial, adscrit al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per mitjà de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient—, a fi de “convertir aquest òrgan en un veritable fòrum institucional de participació de totes les administracions públiques, i de les organitzacions i entitats representatives d'interessos socials i ambientals en l'elaboració i seguiment de les polítiques sobre canvi climàtic promogudes per l'Estat”.

Entre les funcions d'aquest òrgan es troben les següents: facilitar la participació de tots els agents implicats en l'elaboració i el seguiment de les polítiques i mesures sobre canvi climàtic promogudes per l'Estat i fer-ne informes; conèixer i formular recomanacions en relació amb plans, programes i línies d'actuació sobre canvi climàtic; promoure el desplegament d'accions de recopilació, anàlisi, elaboració i difusió d'informació; conèixer les polítiques de la Unió Europea i l'estat de les negociacions internacionals en matèria de canvi climàtic; i qualsevol altra funció que, en el marc de les seves competències, se li atribueixi per alguna disposició legal o reglamentària.

Quant a la composició, el Consell Nacional del Clima està constituït per la Presidència (ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient), la Vicepresidència (secretari d'Estat de Medi Ambient), un secretari (el titular de la Direcció General de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, que té la condició de vocal amb tots els drets inherents a tal condició) i els vocals (pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el subsecretari, el secretari general tècnic i els directors generals de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, de Desenvolupament Rural i Política Forestal, de Sostenibilitat de la Costa i del Mar i de l'Aigua, el president de l'Agència Estatal de Meteorologia, i el director de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals; un representant dels ministeris d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, de Defensa, d'Hisenda i Administracions Públiques, de l'Interior, de Foment, d'Educació, Cultura i Esport, d'Ocupació i Seguretat Social, de la Presidència, d'Economia i Competitivitat, de

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i dos representants del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, designats pels respectius ministres entre directors generals del seu departament; un representant per comunitat autònoma i un altre per cada una de les ciutats de Ceuta i Melilla, designat per l'òrgan autonòmic competent; tres representants designats per l'associació d'entitats locals d'àmbit estatal amb més implantació; dos representants designats per les organitzacions representatives d'empresaris de més implantació; un representant designat pel Consell Superior de Cambres de Comerç; un vocal d'àmplia experiència des del punt de vista mediambiental, designat pel ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; cinc vocals designats per les organitzacions ecologistes de més implantació; tres vocals designats per associacions dels sectors de l'agricultura, ramaderia, pesca i indústries alimentàries; dues vocals pertanyents a l'àmbit de la investigació, designats pel ministre d'Economia i Competitivitat, que han de tenir la condició d'experts en les matèries relacionades amb el canvi climàtic; un vocal pertanyent a l'àmbit de la docència universitària, designat pel ministre que tingui la dita competència, que ha de tenir la condició d'expert en les matèries relacionades amb el canvi climàtic; el director general del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques; dos vocals designats pels sindicats més representatius en l'àmbit nacional; i dos vocals designats pel Consell de Consumidors i Usuaris)⁷³. El nomenament dels membres del Consell Nacional del Clima s'ha de realitzar per ordre del ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La duració del mandat és de tres anys, i es pot renovar pels mateixos períodes de temps.

L'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic exerceix les funcions de secretaria, realitza tasques de suport tècnic i administratiu als òrgans que integren el Consell Nacional del Clima, i la gestió ordinària de les funcions que el Consell té encomanades d'acord amb les directrius aprovades pel Ple.

⁷³ Pel que fa a la constitució del Consell Nacional del Clima, la disposició addicional tercera del Reial decret 415/2014 preveu que, en el termini de dos mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, les diferents administracions públiques, institucions i organitzacions han de proposar els representants al Consell Nacional del Clima. A aquest efecte, el titular de la Direcció General de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, en la qualitat de secretari del Consell Nacional del Clima, els ha de comunicar, amb antelació suficient, l'obertura del termini per proposar els representants.

reuneix, almenys, una vegada l'any, si bé el Ple pot acordar la creació, modificació o extinció de Grups de Treball, el nombre màxim dels quals és de tres per mandat. Per adoptar acords vàlids cal que votin a favor la meitat més un dels membres del Ple, i el president té vot de qualitat en cas d'empat. En tot cas, el funcionament d'aquest òrgan i dels seus grups de treball no suposa cap increment de la despesa pública i és atès amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris ja existents al Departament (disposició addicional segona).

1.4. Altres normes d'interès

A més de les normes que hem ressenyat, en el període objecte d'anàlisi podem esmentar altres normes d'interès en àmbits sectorials diversos. Destaquem, pel que fa a mines, el Reial decret llei 6/2014, d'11 d'abril, pel qual es regula l'atorgament de l'explotació dels recursos miners de la zona anomenada Aznalcóllar. Pel que fa a informació ambiental, l'Ordre PRE/1597/2014, de 5 de setembre, per la qual s'estableixen les quanties i es dicten normes sobre la gestió i el cobrament de la taxa per subministrament d'informació ambiental en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia sobre medi ambient. En l'àmbit de la pesca, l'Ordre AAA/1504/2014, de 30 de juliol, per la qual s'estableixen zones protegides de pesca sobre determinats fons muntanyosos del canal de Mallorca i a l'est del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. Pel que fa a tributació ambiental, l'Ordre HAP/685/2014, de 29 d'abril, per la qual s'aprova el model 587 "Impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. Autoliquidació", i s'estableix la forma i el procediment per presentar-lo. I, quant a energia elèctrica, a més de les ja esmentades en aquesta crònica, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-RAT de 01 a 23; el Reial decret 417/2014, de 6 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 437/2010, de 9 d'abril, pel qual es desplega la regulació del procés de titulització del dèficit del sistema elèctric; i el Reial decret 680/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el procediment de pressupostació, reconeixement, liquidació i control dels extracostos de la producció

d'energia elèctrica en els sistemes elèctrics aïllats dels territoris no peninsulars amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.

Finalment, esmentem també el Reial decret 414/2014, de 6 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics el 2014, en el marc de l'Estratègia integral per a l'impuls del vehicle elèctric a Espanya 2010-2014 (Programa MOVELE 2014); i el Reial decret 525/2014, de 20 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-6).

2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques

En el període que analitzem, les novetats normatives des del punt de vista ambiental que hi ha hagut a Catalunya són poques. No s'ha aprovat cap norma amb rang de llei específicament ambiental. De fet, únicament cal esmentar l'aprovació de dues lleis amb alguna incidència pel que fa a medi ambient: la Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes sobre tributació, comerç i joc, a fi de permetre les activitats de joc i d'apostes en el centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, la qual cosa significa obrir el camí a la posada en marxa del macroprojecte de casinos, hotels i botigues Barcelona World, en aquesta àrea; i la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, l'objecte dels quals és regular, en l'àmbit de competències de la Generalitat, el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat pel que fa a aquesta qüestió.

En l'àmbit reglamentari, les normes més destacables són el Decret 41/2014, d'1 d'abril, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya; el Decret 56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries; i el Decret 64/2014, de 13 de maig, mitjançant el qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Quant als projectes de llei en tràmit, en aquest període ha iniciat la tramitació el Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives; i continua el curs la tramitació del Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants

d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera.

Paral·lelament, s'estan gestant diverses iniciatives normatives de gran interès des del punt de vista ambiental. En primer lloc, el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha elaborat l'Avantprojecte de llei de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya, sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies hàbils, mitjançant l'Edicte de 3 de setembre de 2014⁷⁴. Aquest avantprojecte inclou mesures de simplificació administrativa en l'exercici de les activitats econòmiques i incorpora algunes modificacions importants en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ja que modifica els annexos II i III d'aquesta llei, i amplia les activitats que estaran sotmeses al règim de comunicació en lloc del de llicència. Així mateix, modifica la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat pel que fa a incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; i la llei d'urbanisme, aprovada pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, als efectes de compatibilitzar la simplificació administrativa amb la seguretat de persones i béns. En segon lloc, també s'ha sotmès a informació pública el Projecte de decret d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn⁷⁵, per desplegar la Llei 6/2001, de 31 de maig. En tercer lloc, el Govern català prepara una llei pionera a Espanya de canvi climàtic, per reduir emissions de gasos d'efecte d'hivernacle un 25% el 2020 i un 80% el 2050. Amb aquesta finalitat, ja ha aprovat la memòria prèvia a l'inici de la tramitació de l'avantprojecte de llei de canvi climàtic de Catalunya i ha posat en marxa el procés participatiu de la llei⁷⁶, amb la intenció que el Govern pugui aprovar el projecte de llei a finals d'any. Finalment, el Govern també ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de prevenció, control i qualitat ambiental, que ha de substituir la

⁷⁴ Publicat al DOGC núm. 6702, de 8 de setembre de 2014.

⁷⁵ *Vid.* DOGC núm. 6712, de 23 de setembre de 2014.

⁷⁶ El 10 de juny de 2014 es va publicar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat el document base de la norma (URL: http://canvialimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/tallers_ciutadans/documentacio/ — última consulta, 30 de setembre de 2014—), perquè tots els ciutadans poguessin intervenir per mitjà d'un formulari en línia. A més, s'han realitzat diferents sessions territorials que inclouen també trobades amb el món de l'Administració local. Aquest procés participatiu s'ha realitzat en col·laboració amb el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica, del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i que neix amb la voluntat de racionalitzar i simplificar tràmits en la intervenció sobre les activitats econòmiques.

En l'àmbit de la planificació, el Govern ha aprovat el Pla General de Política Forestal 2014-2024 i el Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire en quaranta municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona.

Des del punt de vista de les iniciatives i actuacions d'interès polític, cal destacar, d'una banda, l'aprovació per part del Govern d'un nou model de sanejament d'aigües residuals amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, al qual ens referirem més avant. D'altra banda, el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, com a representant de la copresidència de la Xarxa de Governos Regionals per al Desenvolupament Sostenible, ha signat a Nova York, en el marc de la Cima del Clima de les Nacions Unides, un compromís voluntari per reduir gasos amb efecte d'hivernacle. El document, subscrit pels membres d'aquesta organització, proporciona una avaluació precisa de la contribució global dels governs subnacionals per reduir les emissions de CO₂ i ajuda a lluitar contra el canvi climàtic. D'aquesta manera, Catalunya es compromet internacionalment a avaluar la seva contribució a la reducció dels gasos d'efecte d'hivernacle.

2.1. La nova regulació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

El Decret 41/2014, d'1 d'abril, ha introduït una nova regulació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (d'ara endavant CADS), a fi de reforçar-ne caràcter d'òrgan d'assessorament estratègic i de consulta del Govern i millorar-ne el funcionament a partir de l'experiència de gestió acumulada en els quinze anys d'existència.

El CADS és un òrgan col·legiat, adscrit al Departament de Presidència, que té com a finalitat assessorar el Govern en relació amb les polítiques i actuacions que incideixen sobre el desenvolupament sostenible. Quant a les funcions, el Decret recull les d'assessorar al Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible i, especialment, en la integració de la sostenibilitat en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern; analitzar les polítiques estratègiques per al desenvolupament sostenible impulsades pel Govern, especialment les relatives a l'energia, l'aigua, la

seguretat alimentària, el canvi climàtic i l'economia verda, i formular propostes en aquests àmbits; promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible; assessorar el Govern en el disseny i l'execució d'actuacions per promoure l'educació per a la sostenibilitat; i promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya. Els informes i propostes que realitzi el CADS són emesos per iniciativa pròpia o a sol·licitud del conseller del Govern competent per raó de les matèries respectives, i no tenen caràcter vinculant.

El CADS està integrat per un president, nomenat pel Govern entre persones de reconegut prestigi i un mínim de deu i un màxim de quinze vocalies, nomenades pel Govern a proposta del president del Consell entre persones de reconegut prestigi o representatives dels diferents sectors econòmics i socials. Els membres són nomenats per un període de dos anys i poden ser nomenats novament per períodes addicionals de dos anys. El president ha de nomenar un vicepresident d'entre les vocalies, que substitueix el president en casos d'absència, impediment o malaltia. El Govern també ha de nomenar, a proposta del president del Consell, un director, que té rang de director general, assisteix a les sessions del Consell amb veu i sense vot i és responsable del funcionament ordinari del Consell, de les convocatòries de les sessions i de l'execució dels acords que s'adoptin.

Pel que fa al funcionament, el CADS actua amb autonomia funcional per garantir-ne l'objectivitat i la imparcialitat. Actua en ple o en comissions especialitzades per raó dels assumptes que s'han de tractar i pot crear grups de persones expertes sobre temàtiques concretes, amb caràcter estable o puntual, el funcionament del qual ha d'estar regulat per un reglament intern. Les recomanacions dels grups de persones expertes són consultives i no tenen caràcter vinculant per al Consell. Ni els integrants del CADS ni els membres dels grups d'experts han de percebre dietes per assistir a les reunions plenàries o en comissió, encara que es preveu que puguin pagar-se indemnitzacions pels desplaçaments i allotjament.

2.2. La regulació de l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret que homologa els mètodes de captura en viu de determinades espècies cinegètiques per evitar desequilibris i alteracions dels ecosistemes naturals. Es tracta del Decret 56/2014, de 22 d'abril, que té com a objecte declarar els mètodes homologats de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores o d'espècies exòtiques invasores depredadores; establir el procediment per a l'homologació de nous mètodes que compleixin els requeriments de benestar i selectivitat per a la seva captura; regular l'acreditació dels usuaris de mètodes de captura homologats; i establir l'excepcionalitat del règim de captura d'aquestes espècies. Aquest Decret s'emmarca en l'article 62.3.g) de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, d'acord amb el qual els mètodes de captura de depredadors que estiguin autoritzats per les comunitats autònomes han de ser homologats basant-se en els criteris de selectivitat i benestar animal fixats pels acords internacionals, i la utilització d'aquests mètodes només pot ser autoritzada mitjançant una acreditació individual atorgada per la comunitat autònoma; i en les directrius específiques elaborades en el marc d'aquest precepte conjuntament per l'Estat i les comunitats autònomes en el si de la Comissió Estatal per al patrimoni natural i la biodiversitat, que s'han acordat en la Conferència Sectorial de Medi Ambient de 13 de juny de 2011 i s'han publicat al BOE.

Amb aquesta normativa s'homologuen els procediments de captura d'animals depredadors o invasors, d'acord amb els criteris de selectivitat i benestar animal fixats a internacionalment. Concretament, es declaren homologats a Catalunya els mètodes de captura següents: Collarum (sistema de retenció per cable activat o propulsat provocat pel mateix animal i que el reté capturat pel coll); llaç amb límit i tancament lliure disposat en finestres; llaç amb límit americà disposat en finestres; llaç amb límit americà disposat al pas, i caixa metàl·lica. Això no exclou la possibilitat d'homologar en el futur, ja sigui d'ofici o a instància de les persones interessades, nous mètodes de captura d'espècies depredadores, ja siguin cinegètiques o exòtiques invasores, ni de modificar les homologacions declarades en funció dels avenços científics que es vagin duent a terme en el transcurs del temps.

El Decret exigeix, a més, per a la utilització de mètodes homologats per a la captura d'espècies cinegètiques o exòtiques invasores depredadores, l'obtenció d'una acreditació que expedeix la direcció general competent pel que fa al medi natural a les

persones que hagin superat el corresponent curs. Això suposa una novetat, ja que fins al moment qualsevol persona podia executar captures amb llicència de caça.

2.3. El Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Donada Atesa l'estreta connexió entre protecció del medi ambient i urbanisme, també hem d'esmentar en aquesta crònica, l'aprovació, mitjançant el Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Amb l'aprovació d'aquesta norma, es compleix al mandat de la disposició final primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (d'ara endavant, TRLU), d'adaptar el Reglament del TRLU al nou marc legal. Després de descartar l'elaboració d'un text reglamentari únic, l'opció governamental ha estat la de dividir el desplegament de la llei d'urbanisme segons les matèries que el conformen dotades de substantivitat pròpia. En aquesta línia, aquest Reglament desplega fonamentalment els títols sisè i setè del TRLU, relatius a la intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl i a la protecció de la legalitat urbanística respectivament, que tradicionalment han constituït la part de l'ordenament jurídic urbanístic que regula els instruments d'intervenció administrativa destinats a mantenir l'ordre social pel que fa a aquesta qüestió. Al desplegament dels títols esmentats s'afegeix el desplegament dels articles 48, 49, 50 i 54 del TRLU, relatius als procediments d'autorització de determinades actuacions en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat i d'obres i usos provisionals que, malgrat que es troben en el títol segon de la llei, relatiu al règim urbanístic del sòl, regulen aspectes procedimentals directament relacionats amb la matèria que és objecte d'aquest Reglament.

Aquest decret, de gran extensió (152 articles), sistematitza la matèria sobre protecció de la legalitat urbanística que regula. A aquests efectes, s'estructura en quatre títols. En el títol preliminar es delimiten l'objecte i els conceptes de legalitat urbanística i de protecció de la legalitat urbanística, configurada aquesta protecció a partir de la seva triple funció preventiva, reparadora i retributiva amb relació a les transgressions de l'ordenament jurídic urbanístic. El títol primer regula la intervenció en l'ús del sòl i en l'execució d'obres, incloent-hi la regulació de les llicències urbanístiques, de la comunicació prèvia i de les ordes d'execució i supòsits de ruïna. El títol segon se centra en la intervenció per restablir la legalitat urbanística vulnerada i conté previsions sobre el règim jurídic de la inspecció urbanística i de la protecció de la legalitat urbanística

vulnerada, relativa als instruments d'intervenció administrativa destinats a restaurar la realitat física alterada i l'ordre jurídic vulnerat per actes il·lícits. Finalment, el títol tercer regula el règim sancionador en aquest àmbit.

D'altra banda, aquest Decret també modifica l'apartat 1 de l'article 20 i els apartats 2 i 3 de l'article 22 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desplega la [Llei 8/2005, de 8 de juny](#), de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística, a fi de fer-los coherents amb les determinacions del TRLU vigents, relatives a la intervenció de les comissions territorials d'urbanisme en els procediments d'aprovació de diverses actuacions en sòl no urbanitzable i la seva competència sobre paisatge.

2.4. Altres normes d'interès

A més de les que hem ressenyat, en el període objecte d'anàlisi s'han aprovat algunes altres normes d'interès des de la perspectiva ambiental. Destaquem, entre altres, en primer lloc, l'Ordre TES/107/2014, de 31 de març, mitjançant la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. En segon lloc, l'aprovació d'altres ordres en àmbits diversos (l'Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre, i es convoquen les ajudes per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015; l'Ordre AAM/177/2014, de 3 de juny, per la qual es modifica l'Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola; l'Ordre TES/184/2014, de 6 de juny, per la qual es regula el Premi Catalunya d'Ecodisseny; i l'Ordre AAM/272/2014, de 25 d'agost, per la qual es modifica la duració del Pla Pilot de Recol·lecció de Bolets en l'àmbit del paratge natural d'interès nacional de Poblet i de la seva zona d'influència, aprovat per l'Ordre AAM/254/2012, de 31 d'agost). En tercer lloc, diverses ordres per mitjà de les quals s'aproven les bases reguladores d'ajudes i subvencions en diferents àmbits (l'Ordre AAM/96/2014, de 25 de març, per la qual s'adapten diverses bases reguladores d'ajudes gestionades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la modificació de la Llei de finances públiques efectuada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; l'Ordre AAM/97/2014, de 24 de març, mitjançant la qual s'aproven les bases reguladores de les

ajudes per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i es convoquen les corresponents al 2014; l'Ordre AAM/115/2014, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre, i es convoquen per a l'any 2014 les ajudes a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinades a la redacció d'instruments d'ordenació forestal, la millora d'infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la prevenció d'incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes forestals; i l'Ordre TES/224/2014, de 18 de juliol, mitjançant la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions i projectes d'educació i sensibilització ambiental).

2.5. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient

A. El nou model de sanejament d'aigües residuals en l'Àrea Metropolitana de Barcelona

El Govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei que permet formalitzar l'acord amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (d'ara endavant, AMB) per crear un nou model de sanejament d'aigües residuals. Es tracta del Decret llei 2/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'AMB. Aquest decret llei fa una nova redacció de la disposició final segona de la Llei 31/2010 i estableix que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha de realitzar un pagament únic a l'Agència Catalana de l'Aigua que ha de compensar l'import de les inversions realitzades amb contribucions de l'Administració Hidràulica de Catalunya per construir les infraestructures de sanejament en alta de l'àmbit territorial que estableix l'article 2 d'aquesta llei. L'import d'aquest pagament únic s'ha de determinar en el conveni de col·laboració a què fa referència l'apartat 2 de la disposició final segona d'aquesta llei⁷⁷, o en el conveni

⁷⁷ Aquest apartat, després de la modificació efectuada pel Decret llei 2/2014, estableix:

“Atenint al que disposa l'apartat 1 i la titularitat dels serveis establerts en l'article 14 C, que conformen actualment el servei metropolità del cicle integral de l'aigua, l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Àrea Metropolitana de Barcelona estableixen, mitjançant la subscripció d'un conveni de col·laboració que ha d'aprovar el Govern, un marc d'atribució de recursos procedents del cànon de l'aigua per fer front a les despeses d'explotació, de reposició i d'inversió dels sistemes de sanejament en alta, i de les instal·lacions associades, incloses les d'aigües pluvials, i els tipus d'actuacions en el mitjà d'interès metropolità que es concretin en el conveni.

El conveni de col·laboració ha de contenir:

a) Els mecanismes de control, coordinació i col·laboració que s'hagin d'activar entre les parts atorgants per a l'exercici adequat de les seves competències respectives, incloent-hi l'assumpció per part de l'AMB, durant el període de vigència del conveni, de la competència prevista en l'article 8.2.c del Text

específic que puguin subscriure a aquest efecte l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha d'aprovar el Govern. Aquest decret llei ha estat validat pel Parlament de Catalunya⁷⁸.

L'acord que l'Agència Catalana de l'Aigua, segons el que estableix la disposició final segona de la Llei 31/2010, ha de subscriure amb l'AMB, que legalment és una entitat local de l'aigua, preveu l'aportació de 800 milions d'euros a la Generalitat com a compensació per les infraestructures de sanejament realitzades fins al moment, i la cessió d'un percentatge del cànon de l'aigua a l'AMB durant un període màxim de trenta anys per al manteniment i l'operació dels sistemes de sanejament. D'aquesta manera, el Govern català afirma que la Generalitat obtindrà un ingrés extraordinari que ha de permetre reduir part del seu dèficit i reestructurar l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua i avançar tres anys, a partir de 2015, l'execució del seu pla d'inversions. A més, es garanteix que l'AMB ha de poder exercir les seves competències de forma autònoma en un marc de funcionament estable, sense dependre de les assignacions de fons que fins ara es destinaven anualment. També ha de permetre a l'AMB fer front a noves necessitats d'inversió, fruit del creixement dels municipis, ja que disposa dels recursos corresponents de forma autònoma.

Quan es formalitzi aquest acord, les depuradores de l'àrea metropolitana passaran d'estar gestionades per l'Agència Catalana de l'Aigua a estar-ho per l'AMB.

B. L'aprovació del Pla General de Política Forestal 2014-2024

refòs de la legislació sobre aigües de Catalunya en relació exclusivament amb les instal·lacions i els serveis públics objecte del conveni.

b) El règim jurídic de l'atribució de recursos provinents del cànon de l'aigua, que als efectes de gestió pot dividir-se en uns quants trams, i també els règims específics de pagament, garanties i cessions de l'atribució i dels recursos mencionats, incloent-hi les que compreguin els drets i obligacions derivats del conveni.

c) La duració del conveni, que no pot ser superior a trenta anys, i el moment de l'efectivitat de les diferents previsions establertes en el conveni.

d) El règim específic de responsabilitats en el cas d'extinció anticipada del conveni, i el règim de penalitzacions".

⁷⁸ Vid. Resolució 737/X del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (DOGC de 16 de juliol).

Mitjançant l'Acord GOV/92/2014, de 17 de juny, s'aprova el Pla General de Política Forestal 2014-2024, que té el caràcter de pla territorial sectorial. Aquest Pla té com a objecte establir les directrius tècniques per executar una política forestal integral en el conjunt del territori de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 7.1 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. La finalitat no és cap altra que establir l'ordenació dels terrenys forestals de Catalunya, per assegurar la conservació i garantir la producció de matèries primeres, potenciar l'aprofitament sostenible dels recursos naturals renovables i mantenir les condicions que permeten un ús recreatiu i cultural d'aquests terrenys. Per complir aquesta finalitat i fer front als reptes actuals del context forestal català i internacional, s'estableixen cinc objectius específics: promoure la gestió activa dels terrenys forestals i la millora de l'accessibilitat als mateixos com una necessitat per potenciar les seves funcions socioeconòmiques i ambientals i fomentar la conservació de la biodiversitat (prevenció de riscos naturals, per exemple, els incendis forestals); donar suport a la propietat i la indústria forestals com principals agents del sector econòmic, buscant fórmules d'organització de l'oferta i la demanda (associacionisme, cooperativisme); millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l'ús dels seus productes; promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la tecnificació dels processos productius del sector forestal; i promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordinació i incorporació dels valors econòmics i ambientals forestals en altres planificacions sectorials per fomentar sinergies.

Per complir aquests objectius, el Pla s'estructura en sis eixos estratègics (planificació, informació i coneixement dels recursos forestals per garantir-ne la persistència; gestió preventiva de riscos naturals; dinamització del sector forestal productiu i creació d'ocupació; conservació dels valors ecològics i funcionals dels espais i recursos naturals; gestió de la funció protectora dels terrenys forestals; millora de la governança i participació de la propietat privada en la conservació i millora del patrimoni natural), 15 línies d'acció i un total de 102 accions operatives a realitzar al llarg dels 10 anys de desenvolupament. Entre les accions, hi ha accions operatives, entre les quals es troben les accions programables (les que es poden delimitar pressupostàriament i establir un calendari d'execució) i les no programables (accions que cal tenir en compte i que s'han de dur a terme), i les accions de suport, que corresponen a l'àmbit de la formació, investigació i transferència o a l'àmbit de la comunicació i divulgació.

Així mateix, el Pla estableix les directrius de política forestal de Catalunya, que són aspectes que cal considerar per a la gestió forestal i d'aplicació per al conjunt dels terrenys forestals de Catalunya i que han de ser desplegades en els documents de planificació forestal que preveu la legislació forestal i, en general, en l'exercici de la gestió forestal del país. Concretament, es recullen vuit grups de directrius: referents a eines i instruments de planificació per a la gestió dels terrenys forestals; per garantir la producció dels terrenys forestals mitjançant el desenvolupament socioeconòmic del territori i la innovació del sector forestal català; per a la conservació i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals, prevenir els riscos naturals i desplegar estratègies adaptatives davant del canvi climàtic; per afavorir el manteniment i la conservació de la biodiversitat biològica; per afavorir la funció protectora dels terrenys forestals i la gestió eficient del cycle de l'aigua; per respectar els drets de la propietat forestal, millorar la projecció social de la gestió forestal i fomentar l'ús responsable dels espais forestals; per a l'avaluació ambiental estratègica; i de compatibilitat dels usos dels terrenys forestals.

Quant al seu pressupost, el pressupost mitjà anual per eixos estratègics és el següent: eix 1, planificació informació i coneixement, 6.750.000 euros (12,72%); eix 2, gestió preventiva de riscos naturals, 10.620.000 euros (20,01%); eix 3, dinamització de la producció, 18.000.000 euros (33,92%); eix 4, conservació dels valors ecològics, 10.300.000 euros (19,41%); eix 5, gestió de la funció protectora dels boscos sobre el sòl i gestió del cycle de l'aigua, 6.000.000 euros (11,31%); eix 6, gestió dels usos públics (2,64%).

C. L'aprovació del Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire en les Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric

Mitjançant l'Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, el Govern ha aprovat el Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat en les Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric. Aquest Pla té com a objectiu principal reduir les emissions d'òxid de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 microns (PM10) en una àrea de 4,3 milions d'habitants de 40 municipis, amb una superfície territorial de 725 km², de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, declarats zona de protecció especial de l'ambient

atmosfèric, a fi de restablir en aquesta zona la qualitat de l'aire i respectar els valors límit que determina la normativa europea.

El Pla recull 166 actuacions, classificades en 4 grups, 3 segons l'organisme públic que té assignada la competència de la seva execució (actuacions de l'Administració de la Generalitat, de l'Estat i dels ens locals) i 1 més al qual pertanyen les mesures que s'han d'adoptar en cas d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica.

Les actuacions que ha de realitzar la Generalitat de Catalunya es troben agrupades per àmbits d'actuació (transport terrestre i mobilitat; indústria, combustió i cogeneració de potència ≤ 50 MWt; generació elèctrica de potència ≥ 50 MWt; Aeroport de Barcelona-Prat de Llobregat; Port de Barcelona; domèstic; sensibilització, formació, informació i comunicació; i fiscal) i objectius proposats (potenciar, incentivar i impulsar el transport públic, urbà i interurbà; afavorir l'intercanvi modal, la diversificació energètica i l'ús racional del vehicle privat; ambientalitzar el parc de vehicles; adequar les autoritzacions a la nova normativa ambiental; incentivar millores energètiques en la indústria catalana; afavorir la generació elèctrica amb criteris de qualitat de l'aire; reduir les emissions del trànsit associat a l'accés de l'aeroport; fer el seguiment de la implantació de les actuacions que ha d'executar AENA; impulsar el transport ferroviari de mercaderies; gestionar els controls i les inspeccions dels vaixells; fomentar l'ús de combustibles alternatius en activitats portuàries i en el seu entorn; millorar l'eficàcia o estalvi energètic i incentivar l'ús de combustibles que emetin menys partícules; difondre el Pla d'Actuació i les seves actuacions, i conscienciar la població sobre els nivells de qualitat de l'aire i donar al públic en general els instruments per avaluar aquesta situació; i crear i habilitar mecanismes de finançament per millorar la qualitat de l'aire), de cara a assolir els nivells de qualitat de l'aire que estableix la normativa de la Unió Europea.

Quant a l'Administració de l'Estat, es distingeixen dos blocs d'actuacions: actuacions del Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016, Pla Aire, que incideixen en la millora de la qualitat de l'aire en la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric; i actuacions suggerides a l'Estat per part de la Generalitat que seria convenient que adoptés l'Estat per millorar la qualitat de l'aire.

En l'àmbit local, les actuacions es classifiquen en tres blocs: les que preveu l'Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net, aprovat el 7 de març de 2013, al qual s'han adherit quinze municipis de la zona de protecció especial;

les actuacions dels plans de millora de la qualitat de l'aire que han d'elaborar els municipis de més de 100.000 habitants, sense perjudici que puguin ser adoptades per municipis de d'un nombre d'habitants més petit; i les que es proposen a tots els municipis independentment de la seva població i que es poden recollir en diferents plans locals.